

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.
QUEJOSA:**

**PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO
DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.**

ÍNDICE

SÍNTESIS.....	I-VIII
AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO REQUERIDO.....	1
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.....	2
SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO.....	8
TRÁMITE DEL RECURSO.....	21
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO	
COMPETENCIA.....	23
AGRAVIOS.....	24
PROCEDENCIA.....	26
ESTUDIO DE FONDO.....	34
PUNTOS RESOLUTIVOS.....	131

SIX FIFTY

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.
QUEJOSA:**

**PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA
VILLEGAS.**

SECRETARIA: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.

S Í N T E S I S

Autoridades Responsables: Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, como autoridad ordenadora, y al Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, al Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Directora del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, del Gobierno del Distrito Federal, las últimas tres como ejecutoras.

Acto Reclamado: La sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Unitario en el toca de apelación /2009 y a todos los actos en cumplimiento de la misma.

Garantías Violadas: Artículos 8, 14 y 16 constitucionales.

Resultado del fallo recurrido: Negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.

Recurrente: La parte quejosa.

El Proyecto Propone:

Declarar fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, los agravios de la quejosa, ahora recurrente, en los que sostiene la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público al derecho a la notificación, contacto y asistencia consular y al derecho fundamental de la presunción de inocencia.

El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público esta Primera Sala precisó que si bien no es posible ni sería adecuado fijar una regla de temporalidad que defina el concepto "sin demora" aplicable a la presentación del detenido ante el Ministerio Público, no se sigue que no sea posible adoptar un estándar que posibilite al juez calificar cada caso concreto de un modo sensible a dos necesidades: la de no dilatar

injustificadamente la puesta a disposición de la persona detenida, porque esto da lugar a la restricción de la libertad personal sin control y vigilancia del Estado; y, las peculiaridades de cada caso en concreto, como la distancia que existe entre el lugar de la detención y la agencia del Ministerio Público.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que de ninguna manera puede justificarse la demora en la puesta de la quejosa a disposición del Ministerio Público, en el hecho de transmitir públicamente una supuesta detención, posterior al rescate de las víctimas, pues ésta, se llevó a efecto a las cuatro horas con treinta minutos del día nueve de diciembre de dos mil cinco; dado que jamás puede considerarse de mayor entidad el interés de los medios de comunicación en el éxito que había tenido la AFI en los diversos casos en que se liberaron a las víctimas de secuestro, así como la información a las sociedad de estos hechos, que el mayor bien jurídico de que puede disponer una persona, como es su libertad personal.

El hecho de que las autoridades permitieran transmitir públicamente la supuesta detención de la quejosa, a través de un medio de televisión, trajo como consecuencia que entre el lapso en que se dijo, efectivamente fue detenida (4.30 horas) y su traslado a fin de ser puesta a disposición del Ministerio Público (8.53 horas), transcurrieran cinco horas con cuarenta y cinco minutos. Ello, constituye una violación procesal constitucional grave consistente en la demora injustificada en la puesta a disposición al Ministerio Público, por vulnerar lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal.

El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular representa el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas del derecho internacional. Por un lado, afianzar el papel de las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen y, por el otro, la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido proceso.

La importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros. Es decir, la posibilidad de que un extranjero pueda ser oído públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, depende —de forma

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

absoluta— del presupuesto previo relativo a la asistencia real y efectiva de los miembros de la oficina diplomática de su país.

De acuerdo con las constancias de autos y a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidencia la existencia de una violación al derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular de forma inmediata, lo que se traduce en la violación a la garantía de defensa adecuada prevista por la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Federal, ya que de la demora en la puesta disposición ante el Agente del Ministerio Público, supone también el que se violentara el derecho de la quejosa a recibir asistencia consular, al impedir que se notificara de inmediato al Consulado General de la República Francesa en México sobre la detención de una ciudadana ya que de acuerdo a la constancia ministerial asentada a fojas 279 del proceso penal, la llamada que realizó a fin de comunicar la detención de la ciudadana de origen francés, se registró a las 15:05 horas del día de su detención, esto es, fuera del horario de atención asentado en la referida constancia, hecho que indudablemente negó la oportunidad de los funcionarios consulares de oponerse o de denunciar de forma inmediata la realización de dichas prácticas contrarias a derecho por parte de la otrora Agencia Federal de Investigación y vulnerando, así, el contenido del derecho a la asistencia consular.

que en aras de cumplir con la **garantía de defensa adecuada**, en todo trámite y procedimiento penal seguido a un extranjero debe garantizarse que la ley y todo el procedimiento sean aplicados con un efecto culturizador a través de la asistencia consular, pues no es lo mismo desde la seguridad jurídica, que las leyes penales y sus procedimientos se apliquen directamente al no nacional que lo desconoce, a que ese derecho —desconocido e incierto para el extranjero— se intente aplicar dentro de parámetros de seguridad jurídica, lo que se logra —al menos desde la presunción de la comunidad internacional—, mediante una culturización a través de la asistencia consular, de ahí que la inobservancia de este Derecho Humano Fundamental contenido en sede normativa convencional afecte significativamente la validez de las actuaciones penales que incurren en su omisión.

Las violaciones al **derecho a la presunción de inocencia** tienen que entenderse en relación con las violaciones a los derechos a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la asistencia consular. Como consta en los autos, la policía incumplió con su obligación de poner a disposición del Ministerio Público de forma inmediata a la quejosa pues una vez realizada la

detención se trasladó a la quejosa al con el argumento de rescatar y proteger a las víctimas. Sin embargo, si la actuación de la policía se hubiera limitado a esas acciones no se hubiera concretado la violación al derecho en cuestión, pero durante de ese lapso es que se realizó una transmisión televisiva por la que se difundió públicamente la supuesta detención de la quejosa junto con otro presunto responsable, en el lugar donde al parecer se encontraban las víctimas de secuestro. Dichos actos produjeron la violación del derecho de la quejosa a ser puesta a disposición inmediatamente ante el Ministerio Público y vuelve inoperante la justificación sobre la demora del traslado que argumentó la policía.

La presunción de inocencia consta de dos vertientes: como regla de tratamiento respecto al individuo y como regla de juicio en el proceso o estándar de prueba. Como regla de tratamiento, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado –sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha– incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito desconoce que la presunción de inocencia determina una configuración compleja en su contenido y que en los términos desarrollados en esta sentencia, no se ve limitada al actuar de los jueces. Asimismo, el Tribunal Colegiado pretende señalar que frente a la “opinión pública” no es exigible la presunción de inocencia. En este punto resulta fundamental señalar que no es la “opinión pública” o los medios de comunicación a los que se les deben imputar el retraso en la puesta a disposición de la quejosa ante la autoridad ministerial. Sino a los agentes y responsables de la Agencia Federal de Investigación que retuvieron indebidamente a la quejosa por aproximadamente cinco horas con la finalidad de obtener la transmisión a través de un medio de comunicación televisivo, de su supuesta detención, cuyo hecho fue reconocido por la Agencia Federal de Investigación en una conferencia de prensa, meses después.

El material probatorio obtenido de forma indebida provoca su falta de fiabilidad, situación que impacta los derechos de la persona acusada, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho que tiene toda persona a que, en caso de ser condenada, su condena no tenga como base evidencia de cuestionable fiabilidad, especialmente cuando ésta es imputable a la actuación ilegal de la autoridad.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Efectos de la concesión del amparo por la violación grave a los derechos fundamentales acontecida en la etapa de la averiguación previa.

No deben tomarse en cuenta, los elementos relativos a la identificación de la quejosa que adiciona a sus anteriores declaraciones en la ampliación de declaración de , de quince de febrero de dos mil seis, de la ampliación de declaración de , realizada por sistema de video conferencia de siete de junio de dos mil seis, de los elementos que adiciona en relación a su anterior declaración en la ampliación de la declaración del menor , rendida ante el Ministerio Público el catorce de febrero de dos mil seis, de la ampliación de declaración de realizada por sistema de video conferencia de siete de junio de dos mil seis, de la declaración rendida por el diez de febrero de dos mil seis, de la segunda comparecencia ministerial del testigo , realizada el primero de marzo de dos mil seis.

Finalmente, en relación a la violación al derecho de la quejosa de no haber contado con la debida asistencia consular, por razones imputables al ministerio público al no haber notificado al consulado desde el momento de que fue puesta a su disposición, lo que no debe tomarse en cuenta es: La totalidad de la primera declaración ministerial rendida por , con fecha nueve de diciembre de dos mil cinco

No obstante que la interpretación constitucional plasmada, trae como consecuencia que se revoque la sentencia recurrida, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de resguardar el principio de congruencia consagrado por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 83, fracción V, de la Ley de Amparo, **se encuentra obligada a pronunciarse sobre una cuestión de legalidad que se encuentra estrechamente vinculada al referido análisis de constitucionalidad**, habida cuenta que las consecuencias de la violación al derecho a la presunción de inocencia se materializan directamente en las pruebas de cargo con las que tribunales acreditaron la responsabilidad de la recurrente por la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, como lo es la valoración que realizó la autoridad responsable de los testimonios rendidos por las víctimas del delito de secuestro y que fue convalidada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, porque dicho estudio no puede desvincularse de aludido tema de constitucionalidad.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que tampoco es posible asignarle valor convictivo a los testimonios rendidos por

y , en las partes que pudieran subsistir, porque los mismos no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que las modificaciones que fueron realizando dichos testigos a sus respectivas declaraciones, producen duda respecto de la espontaneidad del reconocimiento que hicieron de

en cuanto a su participación en los hechos que se le atribuyen y permiten estimar que el mismo fue inducido a partir de su presentación ante los medios de comunicación, ya que ambas víctimas parten de que esa referencia fue derivada de dicha circunstancia, sumado a que en la primera declaración nunca mencionaron su intervención como cómplice, inclusive, conforme se van actualizando las diversas comparecencias ante las autoridades ministeriales, así como al responder a las preguntas formuladas tanto por el defensor particular de la indiciada como de la propia autoridad ministerial, mencionan circunstancias novedosas que hacen dudar de su credibilidad y otras relevantes como el señalamiento que hace

en cuanto a que logró verla en una ocasión en que se encontraban descuidados, que provocan que no sea posible convalidar la valoración de esas pruebas y por ende, que menos puedan adquirir efectos indiciarios respecto de la identidad de la hoy quejosa como uno de sus secuestradores.

El dicho de respecto de la participación de en el secuestro de que fue objeto, se constituye en prueba insuficiente para fincar la plena de responsabilidad de la quejosa

en la comisión que se le atribuye de dicho ilícito, sobre todo si se toma en cuenta que el informe rendido por los policías federales, lo único que pudiera demostrar es su detención en unión de

el día nueve de diciembre de dos mil cinco, a las cuatro horas con treinta minutos, en el kilómetro de la carretera federal a la entrada del poblado de ; pues

como quedó precisado en párrafos precedentes, los hechos que se relacionan con la liberación de las víctimas del secuestro y su supuesta detención en flagrancia por la comisión de este delito, se tradujeron en una violación a la garantía del debido proceso legal, por la demora en su puesta a disposición ante el Ministerio Público; por tanto, no generan ningún valor convictivo en torno a este evento, por tratarse de una prueba que violó flagrantemente los derechos fundamentales de la peticionaria del amparo.

Aunado a lo anterior, no puede pasar inadvertido para esta Sala que si bien el parte informativo rendido por los policías federales se

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

constituye en una prueba de cargo por lo que respecta a los delitos de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; es el caso, que dicho documento carece de fiabilidad, si se toma en consideración que al haberse acreditado una serie de irregularidades en la detención de la quejosa, ahora recurrente, se hizo necesario que en la comparecencia realizada ante el Ministerio Público Investigador el uno de marzo de dos mil seis, los referidos agentes aprehensores reconocieran la existencia de un error en el oficio de puesta a disposición de la detenida, aclarando en ese acto una hora diversa a la en que aconteció la detención, así como también aclararon la hora en la que supuestamente fueron rescatadas las víctimas, hecho este último que además fue desmentido por el propio Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien en una conferencia de prensa realizada el día diez de febrero de dos mil seis, reconoció que las imágenes transmitidas por la televisión no reflejaban el momento real de la detención y rescate de las víctimas.

Por todo lo anteriormente expuesto, al advertirse que los motivos de inconformidad planteados por la quejosa, ahora recurrente, son esencialmente fundados –los cuales fueron suplidos en su deficiencia– a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye que el acto reclamado, es violatorio de los artículos 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho–, en lo concerniente al derecho humano de debido proceso, garantizado por el principio de defensa adecuada y de las reglas de valoración de la prueba; y, en consecuencia, a fin de restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a para el efecto de que el magistrado del Tribunal Unitario responsable, deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva, en la que siguiendo todos y cada uno de los lineamientos que se precisaron en esta ejecutoria, dicte un nuevo fallo conforme a derecho proceda.

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primera Circuito, el dos de marzo de dos mil nueve, en los autos del toca penal /2008, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria, concesión que se hace extensiva respecto de los actos de

ejecución atribuidos las restantes autoridades que precisaron en el
resultando primero de esta sentencia.



**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.
QUEJOSA:**

**PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO
DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.**

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día

**VISTOS, y;
RESULTANDO:**

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el treinta de agosto
de dos mil diez, en la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal
Unitario en Materia Penal del Primer Circuito,

por su propio derecho, solicitó el amparo y
protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades
responsables al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del
Primer Circuito, como autoridad ordenadora, y al Juez Quinto de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, al
Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Directora del
Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, del
Gobierno del Distrito Federal, las últimas tres como ejecutoras; y
como actos reclamados la sentencia de segunda instancia emitida

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS
2013 ENE 11 PM 12 32
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

por el Tribunal Unitario y todos los actos en cumplimiento de la misma¹.

SEGUNDO.- La parte quejosa narró los antecedentes que consideró oportunos y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes, en los cuales identificó como derechos violados los contenidos en los artículos 8, 14 y 16 constitucionales, en relación con diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales.

Los conceptos de violación formulados por la peticionaria de garantías, los cuales, para respetar la redacción de la promovente del amparo, se citan con la incorrecta numeración que se advierte de su demanda, mismos que se hicieron consistir en los siguientes:

En el **primer concepto de violación**, se señala que durante la averiguación previa, el proceso penal /2006 y el trámite de la apelación, la quejosa no gozó de un debido proceso ni de un juicio justo e imparcial². La acusación rompió el **principio de la buena fe ministerial**, tal y como se desprende de las siguientes violaciones que fueron cometidas en contra de la quejosa:

La indebida actuación policial: la policía ministerial debió haber actuado con legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; sin embargo, urdió la

¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 3 a 113.

² Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 7 a 12.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

escenificación de un falso operativo y actuó en total abandono de la buena fe y la verdad³.

La mentira en el operativo: como lo reconoció la autoridad, las imágenes difundidas no corresponden a un operativo en vivo y en directo⁴.

Los testigos cambiaron sus declaraciones: dos testigos no la identificaron en sus primeras declaraciones, pero posteriormente modificaron sustancialmente su primera versión de los hechos y reconocieron a la quejosa como secuestradora⁵.

La dilación indebida en la puesta a disposición del Ministerio Público: en lugar de ser puesta a disposición del Ministerio Público, la quejosa fue obligada a participar en el rodaje de un simulacro policial cuya finalidad era incriminarla⁶.

En el **tercer concepto de violación (sic)**, la quejosa alegó la violación al principio de inmediatez en la valoración de las declaraciones de los testigos que declararon en su contra, pues los testimonios que la incriminan inicialmente no lo hacían, sino que fueron modificándose como consecuencia del montaje⁷.

³ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 7.

⁴ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 7.

⁵ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 7 y 8.

⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 9 a 11.

⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 12 a 34.

En el **cuarto concepto de violación**, la quejosa se dolió del hecho de que **no fueron excluidas las pruebas ilícitas**⁸. La quejosa enfatizó que la **confrontación sin representación constituye una prueba ilícita**⁹, mientras que el **reconocimiento de voz se efectuó sobre un audio editado**¹⁰. Concluyó que la nulidad de una prueba ilícita es una garantía fundamental¹¹.

En el **cuarto concepto de violación bis**, la quejosa indicó que el **trato degradante del que fue objeto anuló el debido proceso y la presunción de inocencia**. Asimismo, señaló que con posterioridad a su detención no fue puesta sin demora a disposición del Ministerio Público¹².

En el **sexto concepto de violación**, la quejosa argumentó que **se violó su derecho al debido proceso por no tener certeza sobre la fecha y hora de su detención**¹³.

En el **séptimo concepto de violación**, la quejosa sostuvo que le causa perjuicio la valoración que la autoridad responsable hizo de la **declaración de** , **pues fue obtenida mediante tortura**, razón por la cual debió excluirse del acervo probatorio o no ser valorada como indicio que opera en contra de la quejosa¹⁴.

⁸ Cuaderno de amparo directo 2010. Demanda de amparo. Fojas 34 a 43.
⁹ Cuaderno de amparo directo 2010. Demanda de amparo. Foja 36.
¹⁰ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 38.
¹¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 43.
¹² Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 44 a 50.
¹³ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 50 a 59.
¹⁴ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 59 a 65.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

En el octavo concepto de violación, la quejosa señaló que si bien es cierto que la policía y el ministerio público gozan de “la presunción institucional de buena fe”, también lo es que en el presente caso violentaron ese principio, de modo que sus actuaciones deben ser cuestionadas y sometidas a una valoración crítica y a un juicio severo, tal y como lo evidencia el rescate que escenificó la policía, con la finalidad de difundirlo en los medios de comunicación¹⁵.

En el noveno concepto de violación, la quejosa manifestó que la **valoración de sus declaraciones fue inequitativa y parcial**, en comparación a la hecha respecto de los informes de la policía¹⁶.

En el décimo concepto de violación, la quejosa señaló que **se violó el derecho que como inculpada extranjera (de nacionalidad) tiene a ser informada sobre el derecho a la asistencia consular**, según la garantía prevista en los artículos 128, fracción IV, *in fine*, del Código Federal de Procedimientos Penales y 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues su declaración ministerial se obtuvo sin la notificación sobre dicho derecho¹⁷. Adicionalmente señaló que no fue sino hasta el veintisiete de febrero de dos mil seis, que su defensor pudo protestar el cargo, siendo que el defensor de oficio no podía articular una defensa porque no se le dio acceso al expediente¹⁸.

¹⁵ Cuaderno de amparo directo //2010. Demanda de amparo. Fojas 65 a 74.

¹⁶ Cuaderno de amparo directo //2010. Demanda de amparo. Fojas 74 a 76.

¹⁷ Cuaderno de amparo directo //2010. Demanda de amparo. Fojas 76 a 85.

¹⁸ Cuaderno de amparo directo //2010. Foja 80.

En el **decimoprimer concepto de violación**, la quejosa arguyó que se violaron en su contra el debido proceso y las garantías de defensa e igualdad procesal, **por no haberle sido concedida una oportunidad para examinar a los testigos en sede judicial**, toda vez que la ampliación de las declaraciones de dos testigos se llevó a cabo en oficinas consulares, con representantes de la parte acusadora¹⁹.

En el **decimosegundo concepto de violación**, la quejosa consideró que se violaron sus derechos a una defensa adecuada y al debido proceso al **no habersele concedido tiempo suficiente ni auxilio judicial para hacer comparecer al proceso a un testigo crucial**,

En el **decimotercero concepto de violación**, la quejosa sostuvo que **se violó su derecho al debido proceso, en torno a las preguntas formuladas a la testigo**

, toda vez que las mismas fueron calificadas de ilegales, atendiendo al derecho que tienen los periodistas a proteger sus fuentes. A pesar de lo anterior, la pregunta era clave para el conocimiento de los hechos y no pretendía revelar la identidad de las personas que hubiesen aportado información a la periodista²¹.

¹⁹ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Demanda de amparo. Fojas 85 a 90. Al respecto, destacó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, inciso c, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el personal del Servicio Exterior Mexicano, dentro del cual se encuentra el Cónsul General de México en Los Ángeles, California, se encuentra subordinado al Ministerio Público Federal en funciones de auxilio suplementario, lo cual implica que la imparcialidad del agente consular está comprometida (foja 87).

²⁰ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Demanda de amparo. Fojas 90 a 92.

²¹ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Demanda de amparo. Fojas 92 y 93.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

En el **decimocuarto concepto de violación**, la quejosa esgrimió que se violó su derecho a un debido proceso en atención a que **no se convocó una junta de peritos ni ante un eventual desacuerdo, a un perito tercero en discordia para el esclarecimiento de la naturaleza de la supuesta lesión de en el dedo**²².

En el **decimoquinto concepto de violación**, la quejosa manifestó que se violaron en su perjuicio los artículos 285 y 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, **por la indebida integración de la prueba circunstancial**, ya que del expediente de la investigación del secuestro de no se desprende indicio alguno que conduzca hacia la quejosa²³.

En el **decimoquinto concepto de violación bis**, la quejosa indicó que se violó en su perjuicio el principio de legalidad, toda vez que el **tribunal responsable no tuvo elementos ciertos que acreditaran su responsabilidad** en los delitos de privación ilegal de la libertad ni violación alguna a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada²⁴.

En el **decimoséptimo concepto de violación**, la quejosa argumentó que se violó en su perjuicio el principio de legalidad, toda vez que **no existen en el expediente pruebas lícitas, aptas ni suficientes para acreditar su responsabilidad penal en la**

²² Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 93 a 97.

²³ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 97 a 100.

²⁴ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 100 a 103.

comisión de los delitos de portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea²⁵.

En el decimoctavo concepto de violación, la quejosa sostuvo que se violaron en su perjuicio el principio constitucional de **presunción de inocencia** y su corolario de duda razonable o *in dubio pro reo*, toda vez que su condena se basó, principalmente, en la mención de un testigo de haber visto un “mechón de pelo güero” y en la escucha de un audio editado con la voz de una persona con acento raro –extranjero-, que “arrastra las ‘erres’”²⁶. En el mismo sentido: (i) consideró que el montaje televisivo tuvo un impacto mediático determinante sobre la opinión pública y los testigos. La quejosa desarrolló este argumento manifestando que la exhibición mediática importó una violación del más grave orden, además que determinó la culpabilidad de la quejosa *a priori* y provocó que la autoridad quedase comprometida con el veredicto de un juicio mediático, encontrándose atada a declarar su culpabilidad contra toda evidencia o razón en contrario²⁷; (ii) criticó el uso del mecanismo denominado “rueda de reconocimiento condicionada por fotos previas”²⁸; y (iii) agregó que **fue detenida arbitrariamente**, sin que existiese flagrancia ni mediara orden de aprehensión o de presentación en su contra²⁹.

TERCERO.- El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió el juicio de amparo mediante

²⁵ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 103 y 104.
²⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 104 a 113.
²⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 105 y 106.
²⁸ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 107 y 108.
²⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 108.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

sentencia de diez de febrero de dos mil once³⁰, sosteniendo que los conceptos de violación hechos valer por

resultaban **infundados** (primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, decimoprimer, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo conceptos de violación), **inoperantes** (quinto, décimo, decimoprimer, decimosegundo y decimocuarto conceptos de violación), **fundados pero inoperantes** (noveno concepto de violación) e **inatendibles** (cuarto y quinto conceptos de violación), según se desprende de las siguientes consideraciones:

Antes de entrar al estudio de cada uno de los conceptos de violación, el Tribunal Colegiado hizo una **consideración genérica sobre la debida integración de la prueba indiciaria para acreditar la responsabilidad de**

por los delitos que se le imputaron. Así, sostuvo que se cumplieron a favor de la quejosa todas las formalidades esenciales del procedimiento³¹, lo cual evidencia que no se violaron en su contra los derechos reconocidos en la Constitución y, específicamente, se respetó lo dispuesto por el artículo 14 constitucional³².

³⁰ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 196 a 989 vuelta.

³¹ El Tribunal Colegiado describe cómo después de la detención de se le decretó un arraigo por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa, se ejerció acción penal en su contra, se dictaron orden de aprehensión y un posterior auto de formal prisión, se instruyó la causa, se cerró la instrucción y se dictó sentencia condenatoria. Adicionalmente, el Tribunal destacó que durante el proceso penal, la quejosa conoció sus derechos, los hechos delictuosos por los cuales se ejerció acción penal en su contra y los nombres de las personas que la acusaron; asimismo, tuvo la oportunidad de presentar pruebas y alegatos; contó con asistencia letrada y, finalmente, tuvo derecho a un recurso efectivo.

³² Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 776 vuelta a 787 vuelta.

Asimismo, previo el estudio de las pruebas valoradas por el Tribunal Unitario, el Tribunal Colegiado concluyó que se encuentra acreditada plenamente la comisión en coautoría de los delitos por los cuales fue condenada: (i) “principalmente con las **declaraciones de las víctimas**

y

” por cuanto hace a los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro³³; (ii) con **los informes de quienes participaron en la detención** en cuanto a los delitos de portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea³⁴; y (iii) con el mismo material probatorio, es decir, con las **declaraciones de las víctimas y los partes de los policías**, respecto de la violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada³⁵.

Consecuentemente, indicó que “es claro que se integra a la perfección la prueba circunstancial de eficacia plena, en cuanto a la configuración de los ilícitos (en) comento, (...) por el enlace armónico, lógico y natural de los elementos probatorios que tomó en cuenta el tribunal de alzada”³⁶.

Respecto de cada concepto de violación en particular, el Tribunal Colegiado sostuvo que:

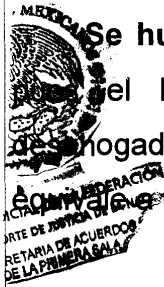
³³ Cuaderno de amparo directo vuelta. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 857

³⁴ Cuaderno de amparo directo vuelta. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 864

³⁵ Cuaderno de amparo directo . 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 871 a 872 vuelta.

³⁶ Cuaderno de amparo directo vuelta. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 869

Es **infundado el primer concepto de violación**, pues aún y cuando es cierto que los principios constitucionales que rigen la actuación de la policía constituyen una garantía para los gobernados, también lo es que no existió ninguna transgresión a dichos principios, toda vez que los videos de los cuales se duele la quejosa **no fueron tomados en consideración en su perjuicio**³⁷. Adicionalmente, aún y si los videos probaran mala fe, sería a cargo de quienes la hubiesen ordenado, más no así de las autoridades que llevaron a cabo la detención, las cuales actuaron con buena fe³⁸. En este sentido, respecto a las diversas violaciones esgrimidas por la quejosa dentro del primer concepto de violación, el Tribunal Colegiado declaró **infundado** que:

 Se hubiese violado en su contra el equilibrio procesal, el hecho de que una prueba ofrecida, admitida y valorada no favorezca a las pretensiones de la quejosa no equivale a un favorecimiento indebido de la pretensión punitiva³⁹.

La quejosa no hubiese gozado de las garantías del debido proceso ni de un juicio justo e imparcial, pues no se advierten en el expediente violaciones a las reglas del procedimiento penal⁴⁰.

Exista una violación al principio de inmediatez en la valoración de las pruebas testimoniales, ya que la aportación

³⁷ Cuaderno de amparo directo a 900. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 888

³⁸ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 888.

³⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 893.

⁴⁰ Cuaderno de amparo directo vuelta. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 893

de datos con posterioridad a la primera declaración no implica necesariamente una reacción al escándalo mediático⁴¹.

La quejosa no hubiese sido puesta a disposición del Ministerio Público sin demora con la finalidad de incriminarla⁴².

Es inatendible el argumento referente a que fue tachada de culpable por la opinión pública, pues, evidentemente, el tribunal de alzada no consideró a la opinión pública para emitir su sentencia⁴³.

Declaró **infundado el segundo⁴⁴ concepto de violación**, ya que a su juicio no es factible ni creíble que las víctimas se hubiesen prestado para una actuación televisiva una vez que fueron liberadas, ni que, ante la evidencia de que el video era un montaje, hubiesen cambiado sus declaraciones para condenar a la quejosa⁴⁵.

De hecho, resulta normal que las víctimas que han experimentado procesos traumáticos recuerden paulatinamente sus vivencias, especialmente en casos de secuestros⁴⁶. Al respecto, el Tribunal Colegiado recordó que, por su propia

⁴¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 894 a 895 vuelta.

⁴² Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 897 vuelta a 898 vuelta.

⁴³ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 899 vuelta.

⁴⁴ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**tercero**".

⁴⁵ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 900 a 929 vuelta.

⁴⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 894 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

naturaleza, las diligencias de ampliación ministerial conllevan la posibilidad de que los testigos introduzcan aclaraciones o nuevos datos sobre una investigación⁴⁷. Adicionalmente, el Tribunal Colegiado destacó dos hechos sobre la supuesta influencia del montaje: (i) reconoció a la quejosa desde su primera declaración, antes de que se reconociera que el video constituyó un montaje⁴⁸; y (ii) los testigos recordaron muchos hechos y no solamente los relacionados con la quejosa⁴⁹.

Resulta infundado el tercer⁵⁰ concepto de violación, toda vez que las pruebas no evidencian inducción alguna o presión para que las víctimas reconocieran a la quejosa⁵¹, además de que no es factible impedir que una persona que haya sido víctima de un delito se entere de lo que se transmite o informa en los medios de comunicación⁵². El Tribunal Colegiado agregó que el origen de la videograbación sí es cierto, pues fue realizado por el perito , el dieciséis de diciembre de dos mil y cinco, con base en la videograbación que se realizó de la quejosa el nueve del mismo mes y año⁵³.

⁴⁷ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 902, 916 y 916 vuelta.

⁴⁸ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 904 vuelta.

⁴⁹ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 904 vuelta.

⁵⁰ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "cuarto".

⁵¹ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 929 vuelta a 936 vuelta.

⁵² Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 932.

⁵³ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 931 vuelta.

Resulta **infundado e inatendible el cuarto**⁵⁴ **concepto de violación** porque la autoridad responsable **no otorgó valor probatorio a los videos** correspondientes a los programas televisivos del nueve de diciembre de dos mil cinco, de donde se desprende que no se afectaron sus garantías al debido proceso y a la presunción de inocencia⁵⁵. Igualmente es inatendible el argumento referente a que los agentes de policía tomaron fotografías de la quejosa y permitieron que fuese filmada, toda vez que dichas **imágenes no fueron utilizadas en su perjuicio**⁵⁶, además que no se encuentra probado que hubiese sido la autoridad ministerial la que autorizó la labor de los medios informativos.

En cuanto a la puesta a disposición ante el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado sostuvo que el argumento de la quejosa es inoperante, pues del estudio de las constancias se desprende que los elementos de policía que la detuvieron se dirigían a las oficinas de la representación social, hasta que fueron informados por [redacted] que si no regresaban pronto al [redacted], correría peligro la vida de las personas detenidas. Consecuentemente, las autoridades regresaron al [redacted], lo que comprueba que la dilación en la puesta a disposición del Ministerio Público se debió a **causas de fuerza mayor**: preservar la vida e integridad de las víctimas y brindarles atención médica y psicológica de urgencia⁵⁷.

⁵⁴ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**cuarto**" por segunda ocasión.

⁵⁵ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 936 vuelta a 941 vuelta.

⁵⁶ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 941.

⁵⁷ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 937 a 937 vuelta.

Resulta infundado, inoperante e inatendible el quinto⁵⁸ concepto de violación, puesto que la supuesta falta de certeza sobre la detención de la quejosa se basa en una conferencia de prensa ofrecida por altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, a quienes obviamente no les constan los hechos⁵⁹.

Resulta infundado el sexto⁶⁰ concepto de violación, pues, suponiendo sin conceder que hubiese sido víctima de tortura, no se precisó cuándo habrían ocurrido sus lesiones, las cuales parecen no ser consistentes con las horas y relato de la detención. Además, su declaración buscó exculpar , de modo que la declaración no causó agravio a la quejosa⁶¹.

Resulta infundado el séptimo⁶² concepto de violación, ya que los argumentos sobre la supuesta y no probada mala fe de las autoridades que efectuaron la detención ya fueron contestados ampliamente al responder el primer concepto de violación, por lo cual el Tribunal Colegiado simplemente reiteró que no existían elementos probatorios que sustentaran la

⁵⁸ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "sexto".

⁵⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 941 vuelta a 947. Véase especialmente la foja 944.

⁶⁰ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "séptimo".

⁶¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 947 a 949 vuelta.

⁶² En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "octavo".

existencia de una conspiración con la finalidad de incriminar a la quejosa⁶³.

Resulta infundado el octavo⁶⁴ concepto de violación, en atención a que los elementos probatorios a los cuales hace referencia la quejosa son irrelevantes para el análisis de su pertenencia a una organización criminal⁶⁵.

Resulta fundado pero inoperante el noveno⁶⁶ concepto de violación, toda vez que se transgredió el derecho de la quejosa a ser informada sobre el derecho a ser asesorada o asistida por la representación consular de su país, pero dicha violación a sus derechos fue subsanada inmediatamente. Además, con anterioridad a que rindiese su declaración ministerial, la quejosa fue informada de su derecho a no declarar, mientras que al momento de hacerlo fue asistida por defensor y traductor, lo que evidencia que no se encontraba en estado de indefensión⁶⁷.

En el mismo sentido, el Tribunal Colegiado indicó que el Código Federal de Procedimientos Penales “no obliga al Ministerio Público de la Federación a esperar hasta que el extranjero se encuentre asesorado por la embajada o

⁶³ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 949 vuelta a 953 vuelta.

⁶⁴ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como “noveno”.

⁶⁵ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 953 vuelta a 955 vuelta.

⁶⁶ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como “décimo”.

⁶⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 955 vuelta a 960.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

consulado de su país, para recibir su declaración ministerial”⁶⁸.

A pesar de lo anterior, consideró que existió una transgresión a su derecho, aunque manifestó que para restituir a la quejosa en el goce de sus garantías debía cumplirse con la obligación de informarle de la posibilidad de ser asistida por la representación consular de su país de origen y de comunicar a ésta última sobre la prisión preventiva de la peticionaria de amparo, lo que en el caso ya ocurrió. Adicionalmente, el Tribunal Colegiado destacó que la quejosa no estuvo en estado de indefensión pues fue asesorada por miembros de su embajada a partir del día siguiente a su detención⁶⁹.

El resto de los argumentos de la quejosa hechos valer en el mismo concepto de violación, referentes a que el defensor no fue de su elección y que el traductor trabajaba para la Procuraduría General de la República, fueron declarados infundados en atención a que el Estado no tiene la obligación jurídica de otorgar a los indiciados el defensor o traductor que más les plazca⁷⁰.

Resulta inoperante el décimo⁷¹ concepto de violación, puesto que el desahogo de la ampliación de las declaraciones de los testigos por videoconferencia, como consecuencia de su ubicación en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América,

⁶⁸ Cuaderno de amparo directo 517/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 957.

⁶⁹ Cuaderno de amparo directo 517/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 958 y 958 vuelta.

⁷⁰ Cuaderno de amparo directo 517/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 959.

⁷¹ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como “decimoprimer”.

se acordó el veinticuatro de mayo de dos mil seis y la quejosa no se inconformó con dicho auto de la juez instructora⁷².

Resulta parcialmente infundado y parcialmente inoperante el decimoprimer⁷³ concepto de violación, pues la juez instructora desahogó todos los medios que tuvo a su alcance para localizar y citar al testigo , sin que tuviesen éxito esas determinaciones. La quejosa no se inconformó con la resolución que declaró desierta la prueba⁷⁴.

Resulta inoperante el decimosegundo⁷⁵ concepto de violación, ya que contra la declaratoria de improcedencia hecha por la juez respecto de una pregunta en el curso de un interrogatorio precede el recurso de apelación, sin que la quejosa lo hubiese interpuesto⁷⁶.

Resulta contradictorio e infundado el decimotercero⁷⁷ concepto de violación, en atención a que: (i) el supuesto dictamen del médico adscrito a la Procuraduría General de la República, que la quejosa presentó como prueba, en realidad no es un dictamen sino un simple informe; y (ii) el dictamen médico practicado a por el :

⁷² Cuaderno de amparo directo 4 /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 960 a 961 vuelta.

⁷³ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimosegundo".

⁷⁴ Cuaderno de amparo directo 4 /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 961 vuelta a 965.

⁷⁵ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimotercero".

⁷⁶ Cuaderno de amparo directo 4 /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 965 a 966.

⁷⁷ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimocuarto".

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

el doce de junio de dos mil seis, no fue concluyente⁷⁸.

Resulta por una parte inoperante y por otra infundado el decimocuarto⁷⁹ concepto de violación, toda vez que la prueba circunstancial en contra de la quejosa no pretendió en ningún momento vincularla con la privación ilegal de
, sino que la misma condujo a la detención de

. Lo anterior repercutió en la quejosa porque, al momento de la detención antes citada, ella fue encontrada en flagrancia cometiendo diverso ilícito, que posteriormente condujo a descubrir su participación en los secuestros⁸⁰.

Resulta infundado y confuso el decimoquinto⁸¹ concepto de violación, puesto que la quejosa combate indistintamente las sentencias de primera y segunda instancia y soslaya que el tribunal responsable valoró las pruebas a que hizo referencia la quejosa, así como otras con las cuales encontró acreditadas las conductas ilícitas que se le imputaron⁸².

⁷⁸ Cuaderno de amparo directo 517/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 966 a 971.

⁷⁹ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimoquinto".

⁸⁰ Cuaderno de amparo directo 517/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 971 a 973 vuelta.

⁸¹ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimoquinto" por segunda ocasión.

⁸² Cuaderno de amparo directo 517/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 973 vuelta a 976 vuelta.

Resulta infundado el decimosexto⁸³ concepto de violación, pues, contrario a lo manifestado por la quejosa, la autoridad responsable sí encontró elementos probatorios aptos y suficientes para tener por acreditados los delitos de portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea⁸⁴.

Resulta infundado el decimoséptimo⁸⁵ concepto de violación, ya que sus argumentos son un resumen de aquellos ya estudiados y contestados⁸⁶. El Tribunal Colegiado reiteró que la presunción de inocencia se goza frente a los tribunales constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública⁸⁷.

Por las razones anteriores el Tribunal Colegiado confirmó la pena impuesta a la quejosa⁸⁸. Consecuentemente, negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa.

La pena decretada en contra de
de 60 años de prisión y 6400 días de multa,
equivalentes a
calculados según el salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal al momento de los hechos:
\$46.80 M.N. cuarenta y seis pesos con ochenta centavos). Dicha

⁸³ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimoséptimo".

⁸⁴ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 976 vuelta a 980 vuelta.

⁸⁵ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimooctavo".

⁸⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 980 vuelta a 989.

⁸⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 983.

⁸⁸ Cuaderno de amparo directo 3/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 984 a 986.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

pena es consecuencia del siguiente cálculo: **60 años** de prisión fueron impuestos a la quejosa por los tres delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; **4 años** por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; **2 años** por posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y **4 años** por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La suma da un total de **70 años** de prisión; pero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal Federal, el límite para la pena de prisión es de **60 años**, razón por la cual se redujo la condena de

CUARTO.- Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, mediante escrito presentado el siete de marzo dos mil once⁸⁹, en el cual, además hizo algunas consideraciones sobre la procedencia del recurso⁹⁰.

QUINTO.- Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil once, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, lo registró en el expediente 517/2011 y lo remitió a esta Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad⁹¹.

⁸⁹ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 2 a 33 y foja 38.

⁹⁰ La quejosa señaló que el recurso de revisión es procedente en atención a que los conceptos de violación de la demanda de amparo convocaron la interpretación directa de diversos preceptos constitucionales cuya transgresión quedó expresada en la **causa de pedir**. Asimismo, destacó que, por tratarse de materia penal, opera a su favor la **suplencia de queja** de los conceptos de violación (foja 2).

⁹¹ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 34 a 35.

Mediante proveído de diez de marzo de dos mil once, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto, admitió a trámite el recurso de revisión y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la formulación del proyecto de resolución respectivo⁹². Habiéndose listado para ser visto en la sesión del veintiuno de marzo de dos mil doce, se determinó devolver los autos a la presidencia de esta Sala para el efecto de retornar el asunto a uno de los ministros de la mayoría que votó por la concesión del amparo, para la elaboración del nuevo proyecto, en el cual, según lo ordena el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,⁹³ fueran tomadas en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones.

Finalmente, por acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil doce, se retornó el asunto a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

⁹² Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 38 a 39.

⁹³ ARTICULO 17. LAS RESOLUCIONES DE LAS SALAS SE TOMARAN POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS DE LOS MINISTROS PRESENTES, QUIENES NO PODRAN ABSTENERSE DE VOTAR SINO CUANDO TENGAN IMPEDIMENTO LEGAL O CUANDO NO HAYAN ESTADO PRESENTES EN LA DISCUSION DEL ASUNTO DE QUE SE TRATE.

SI AL LLEVARSE A CABO LA VOTACION DE UN ASUNTO NO SE OBTUVIERE MAYORIA, EL PRESIDENTE DE LA SALA LO TURNARA A UN NUEVO MINISTRO PARA QUE FORMULE UN PROYECTO DE RESOLUCION QUE TOME EN CUENTA LAS EXPOSICIONES HECHAS DURANTE LAS DISCUSIONES.

SI A PESAR DE LO PREVISTO EN EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE OBTUVIERE MAYORIA AL VOTARSE EL ASUNTO, EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NOMBRARA POR TURNO A UN INTEGRANTE DE OTRA SALA PARA QUE ASISTA A LA SESION CORRESPONDIENTE A EMITIR SU VOTO. CUANDO CON LA INTERVENCION DE DICHO MINISTRO TAMPOCO HUBIERE MAYORIA, EL PRESIDENTE DE LA SALA TENDRA VOTO DE CALIDAD.

EL MINISTRO QUE DISINTIERE DE LA MAYORIA PODRA FORMULAR VOTO PARTICULAR, EL CUAL SE INSERTARA EN LA EJECUTORIA RESPECTIVA SI FUERE PRESENTADO DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACUERDO.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, reformado mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de octubre de dos mil once; toda vez que, el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo en materia penal, por un Tribunal Colegiado de Circuito, que es materia de especialidad de esta Sala.

SEGUNDO.- El recurso de revisión planteado por la parte interesada fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito fue notificada personalmente el dieciocho de febrero de dos mil once, surtiendo efectos el veintiuno del citado mes y año, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del martes veintidós de febrero al lunes siete de marzo, ambos de dos mil once, sin contar en dicho cómputo los días diecinueve, veinte y veintisiete de febrero, cinco y seis de marzo de dos mil once, por ser sábados y domingos y en

consecuencia inhábiles conforme al artículo 23 de la Ley de Amparo.

TERCERO.- La recurrente expresó, como agravios los argumentos que a continuación se sintetizan:

En el **primer agravio**, la quejosa consideró que le causa perjuicio la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado respecto al **principio de buena fe ministerial**, consagrado en el **artículo 21 constitucional**, pues dicho Tribunal consideró que el montaje televisivo no violó garantía alguna en perjuicio de la ahora recurrente al ser desechado como prueba. La recurrente sostuvo que la escenificación de la policía constituyó una violación a sus derechos a la presunción de inocencia y a la dignidad personal⁹⁴.

En el **segundo agravio**, la quejosa arguyó que le causó perjuicio la interpretación que el Tribunal Colegiado hizo del mandamiento constitucional de **“puesta a disposición sin demora de un inculpado”**, previsto en el **artículo 16 de la Ley Fundamental**. El Tribunal Colegiado señaló que no es posible medir en horas y minutos el término “inmediatamente” o “sin demora”, sino que debe ser valorado a conciencia en cada caso, concluyendo que en este asunto la demora se encontraba justificada por la necesidad de otorgar atención médica y psicológica urgente a las víctimas. Para la quejosa esto constituyó una retención indebida, pues la escenificación no guarda relación con la supuesta atención médica y psicológica de referencia⁹⁵.

⁹⁴ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 2 a 11.

⁹⁵ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 11 a 17.

En el **tercer agravio**, la quejosa manifestó que le causa perjuicio la valoración que el Tribunal Colegiado hizo de la declaración de _____ toda vez que ésta fue obtenida mediante tormentos, de modo que debió considerarse como una prueba ilícita, aún y cuando pueda estar corroborada por otros datos⁹⁶.

En el **cuarto agravio**, la quejosa indicó que le causa perjuicio la sentencia del Tribunal Colegiado al estimar fundado pero inoperante el concepto de violación referente a **la violación de su derecho fundamental a ser informada de la asistencia consular**, previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, **pues dicha violación vició el procedimiento**. Asimismo, señaló que el Tribunal Colegiado se olvidó del principio de supremacía constitucional, pues no reconoció que la transgresión a un derecho fundamental necesariamente tiene un impacto en el proceso. Aunado a lo anterior, citó diversos casos a nivel internacional en los que el gobierno mexicano ha impulsado el debido cumplimiento de este derecho⁹⁷.

En el **quinto agravio**, la quejosa destacó que el Tribunal Colegiado violó en su perjuicio **el artículo 17 constitucional y, con ello, los principios de congruencia y exhaustividad** en la valoración de las pruebas, pues no se tomaron en consideración

⁹⁶ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 17 a 19.

⁹⁷ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 19 a 24.

aquéllas que aportó en las primeras instancias, además que se valoraron indebidamente las pruebas testimoniales⁹⁸.

En el **sexto agravio**, la quejosa señaló que la interpretación del Tribunal Colegiado de Circuito afectó **su derecho fundamental a ser presumida como inocente**, en el momento en que señala que ese derecho existe solamente frente a tribunales constitucionalmente constituidos y no frente a la opinión pública. Por el contrario, la quejosa afirma que se trata de un principio oponible a toda autoridad y que opera en situaciones procesales y extraprocesales. Asimismo, se queja de que el Tribunal Colegiado eludió pronunciarse sobre los efectos procesales de la actuación ilegal de la autoridad, bajo el argumento de que los videos simplemente no fueron tomados en cuenta por la autoridad responsable que la condenó⁹⁹.

CUARTO.- Previo al análisis de los agravios, resulta necesario constatar si en el caso se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo.

Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹⁰⁰ —en su texto vigente y aplicable

⁹⁸ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 24 a 27.

⁹⁹ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 27 a 33.

¹⁰⁰ El texto de dicho artículo es el siguiente: "**Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;...**"

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

al momento de resolver el presente asunto— se desprende que, por regla general, las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo directo, son irrecurribles.

Sin embargo, por excepción, en dichos casos procederá el recurso de revisión en amparo directo ante el Alto Tribunal de la República sólo cuando se trate de sentencias que decidan (expresa o implícitamente) u omitan decidir sobre cuestiones propiamente constitucionales, entendiendo por tales, a la interpretación directa, expresa o implícita de preceptos constitucionales o a las declaratorias de inconstitucionalidad de leyes, en la inteligencia que, además, la resolución del asunto debe conllevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia; esto, conforme a acuerdos generales que la propia Cámara emita, destacando que, en congruencia con dicha regla constitucional, debe tenerse presente que el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal Pleno aprobó el Acuerdo General 5/1999, en el cual se establecieron las bases generales para la procedencia y tramitación de estos recursos, en cuyo punto PRIMERO¹⁰¹, se acotaron los requerimientos de

¹⁰¹ El texto de dicha regla es el siguiente: "**PRIMERO.-Procedencia—** I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes: — a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.— b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.— Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de

procedibilidad de la instancia de referencia en los términos ahí señalados; a lo cual cabe añadir que dicho aspecto es relevante porque determina la materia de la revisión, tanto así que el invocado fundamento 107, fracción IX, en su parte final dispone que la materia del recurso se limitará a la decisión de dichas cuestiones de constitucionalidad, sin poder comprender otras.

La anterior regla de la normativa básica debe ser entendida en relación con sus normas de desarrollo constitucional, que son los artículos 83, fracción V, 84, fracción II, y 93 de la Ley de Amparo¹⁰², así como 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación¹⁰³,

constitucionalidad.— II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:— a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;— b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;— c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.”

¹⁰²El texto de dichos fundamentos es el siguiente:

“ARTICULO 83.- Procede el recurso de revisión: (...) V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción II del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.— La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.”

“ARTICULO 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: (...) II.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83.”

“ARTICULO 93.- Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83, fracción V de esta ley.”

¹⁰³El texto de dichos artículos es el siguiente:

“ARTICULO 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: (...) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

destacando que, como es ampliamente conocido, los últimos dos fundamentos son los que, de manera especial, autorizan la procedencia legal del recurso de revisión en amparo directo cuando se presente la omisión de análisis de los temas propiamente constitucionales por parte de los Tribunales de Circuito, amplitud normativa que comprende, desde luego, a las interpretaciones implícitas o poco desarrolladas en las consideraciones recurridas.

Con base en lo anterior resulta inconcuso que, en el caso, se encuentra perfectamente satisfecha la procedencia del recurso porque, tanto de la lectura de la sentencia recurrida como de los planteamientos expuestos en los agravios, se hace evidente que el fallo recurrido contiene varias interpretaciones constitucionales, algunas expresas, otras tantas implícitas, las cuales representan consideraciones del tribunal A que son tanto suficientes como congruentes para los efectos de la procedencia del recurso; esto, en congruencia con la reiterada jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la que se citará más adelante).

federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;...”

ARTICULO 21. *Corresponde conocer a las Salas: (...) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:— a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y (...)”*

En efecto, desde la demanda de amparo directo se observa que la quejosa propuso varios conceptos de violación (que más adelante se enunciarán), los cuales, para su recta resolución, resultaba indispensable una interpretación constitucional por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, sobre todo porque las peculiaridades del caso y la condición especial de la inculpada, así como sus condiciones culturales de vulnerabilidad en una Nación y un derecho extraño, no permitían que un tribunal procediera sencillamente a la aplicación ordinaria de las interpretaciones, jurisprudencia y derecho aplicables en un contexto de regularidad, sino que, por la singularidad del caso se hacía necesaria una interpretación constitucional y aplicación modalizada del derecho (particularmente del procesal penal) en la que se consideraran las peculiaridades de este asunto en concreto.

De manera tal que como el tribunal A quo, se ocupó de dichos conceptos de violación de contenido interpretativo constitucional, entonces lógico es que éste necesariamente realizó interpretación constitucional, aún de modo implícito, según el criterio valorativo de carácter positivo que, reitérese, en jurisprudencia sostiene esta Primera Sala.

Esos planteamientos constitucionales propuestos desde la demanda de amparo y sus respectivas respuestas contenidas en las consideraciones de la sentencia recurrida, están referidas a los temas siguientes:

Temáticas relativas al Principio Constitucional de Presunción de Inocencia (desprendidos del entendimiento de los artículos 14, 16, 17 y 20, apartados A y B, fracción I, constitucionales y su repercusión en el caso).

Alcances, límites y repercusión —tanto procesal como sustantiva— de la cláusula constitucional relativa a la detención del inculcado y su inmediata puesta a disposición de la representación social ministerial (de necesaria interpretación al artículo 16, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal).

La definición de varios conceptos relacionados con el Derecho Humano Fundamental de Debido Proceso en Materia Penal (artículos 14, 16, 17 y 20, apartados A y B)

Defensa Adecuada y Defensa Adecuada pero en su modalidad especial aplicable a extranjeros sujetos a proceso penal en México, especialmente las desarrolladas, tanto en la regla procedimental de derecho interno contenida en el artículo 128, fracción IV, in fine, del Código Federal de Procedimientos Penales (asistencia consular como formalidad esencial del procedimiento y garantía de defensa especial en procesos relacionados con extranjeros en México), como en la diversa interpretación de los alcances y límites del Derecho a la Asistencia Consular para la Culturización del Proceso, que es un

Derecho Humano Fundamental de orden convencional y, por ende, de carácter constitucional desprendido del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

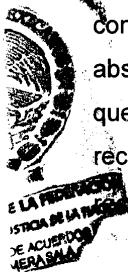
Sobre las bases anteriores, resulta claro que el presente recurso de revisión es procedente —en lo general— porque en la sentencia recurrida sí existen decisiones y consideraciones sobre los temas propiamente constitucionales antes descritos, las cuales serán motivo de análisis —en lo particular— en el estudio de fondo de esta sentencia.

Retomando lo antes afirmado, debe destacarse que la jurisprudencia de esta Primera Sala que permite asegurar la existencia de los señalados pronunciamientos constitucionales implícitos y semiexpresos mediante un criterio positivo de valoración es la siguiente:

**"INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES
CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU
IDENTIFICACIÓN.** En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden detectarse, al menos, dos criterios positivos y cuatro negativos para identificar qué debe entenderse por "interpretación directa" de un precepto constitucional, a saber: en cuanto a los criterios positivos: 1) la interpretación directa de un precepto constitucional con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, para lo cual puede atenderse a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al utilizar los métodos gramatical, analógico, histórico,

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

lógico, sistemático, causal o teleológico. Esto implica que la sentencia del tribunal colegiado de circuito efectivamente debe fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de una disposición constitucional; y, 2) la interpretación directa de normas constitucionales que por sus características especiales y el carácter supremo del órgano que las crea y modifica, además de concurrir las reglas generales de interpretación, pueden tomarse en cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y económico. En cuanto a los criterios negativos: 1) no se considera interpretación directa si únicamente se hace referencia a un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en el que se establezca el alcance y sentido de una norma constitucional. En este caso, el tribunal colegiado de circuito no realiza interpretación alguna sino que simplemente refuerza su sentencia con lo dicho por el Alto Tribunal; 2) la sola mención de un precepto constitucional en la sentencia del tribunal colegiado de circuito no constituye una interpretación directa; 3) no puede considerarse que hay interpretación directa si deja de aplicarse o se considera infringida una norma constitucional; y, 4) la petición en abstracto que se le formula a un tribunal colegiado de circuito para que interprete algún precepto constitucional no hace procedente el recurso de revisión si dicha interpretación no se vincula a un acto llamado. ¹⁰⁴



Justificada la procedencia del recurso se procederá a continuación al análisis de fondo, considerando que la materia de la revisión se concretará a la definición de los anteriores aspectos

¹⁰⁴ Novena Época.— Registro: 164023.— Primera Sala.— Jurisprudencia 1a./J. 63/2010.— Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 329. — Reclamación /2009. *****. 13 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. — Amparo directo en revisión /2009. *****. 8 de julio de 2009. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.— Recurso de reclamación 2009. *****. 12 de agosto de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. — Amparo directo en revisión /2009. *****. 12 de agosto de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Selina Haidé Avante Juárez. — Recurso de reclamación /2009. *****. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

de interpretación constitucional, así como a los aspectos directa e inmediatamente relacionados con los mismos.

QUINTO.- Previamente al análisis de los motivos de inconformidad, se estima necesario establecer los antecedentes más relevantes, que se derivan de la causa penal /2006 instruida a :

El treinta y uno de agosto de dos mil cinco, fue secuestrada , mientras se dirigía a la escuela preparatoria en la cual estudiaba. El dos de septiembre de dos mil cinco, se inició la averiguación previa /2005¹⁰⁵. El cinco de septiembre de ese propio año, tras recibir el pago del rescate correspondiente, los secuestradores de la dejaron en libertad, después de seis días de cautiverio¹⁰⁶. El trece de septiembre siguiente, la víctima se presentó a declarar y realizó una narración sobre los hechos de su secuestro¹⁰⁷.

El cuatro de octubre de dos mil cinco, un de secuestradores privó de la libertad a , a quien extrajeron del billar "L ", donde trabajaba, para subirlo a una camioneta y posteriormente exigir un rescate a cambio de su libertad¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Acuerdo de inicio de la averiguación previa. Fojas 1 y 2.

¹⁰⁶ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Informe del agente de la policía federal investigadora adscrita a la Agencia Federal de Investigación. Fojas 13 a 20.

¹⁰⁷ Cuaderno de primera instancia /2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 23 a 26.

¹⁰⁸ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 882 vuelta; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 248 a 255.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

El diecinueve de octubre de dos mil cinco, el mismo grupo delictivo privó de la libertad a

y a su hijo,

, quienes fueron interceptados en la avenida
, de la Ciudad de México, y obligados a descender de su
vehículo y subir al de los secuestradores¹⁰⁹.

El dieciocho de noviembre de dos mil cinco, l
se presentó en la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (en adelante "SIEDO")
a denunciar el secuestro de su esposo

110

Según declaraciones de las víctimas, a finales de noviembre
de dos mil cinco, fueron trasladadas de una casa de seguridad en
al , donde permanecieron durante la
primera etapa de su cautiverio¹¹¹.

Las investigaciones sobre el secuestro de
llevaron a la identificación del automóvil con el cual se
perpetró el ilícito. Así, las autoridades siguieron dicho vehículo
hasta llegar a la carretera a la altura
del , esquina con la calle cerrada de ,
colonia , Delegación , y se percataron

¹⁰⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 883.

¹¹⁰ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo IV. Declaración de
Fojas 110 a 113.

¹¹¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 866
vuelta; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaraciones de:
(Fojas 224 a 231); (Fojas 256 a 259); y
(Fojas 248 a 255).

que ingresó a un inmueble llamado , lo que provocó que se activara un operativo de vigilancia en ese lugar. Se recopiló información acerca de este inmueble, lo que condujo a la confirmación del señalamiento que hizo

sobre , como uno de los responsables de su secuestro, y también respecto al vehículo utilizado en el secuestro¹¹².

Fue a partir de esta investigación que la policía encontró indicios de que en el se encontraban privados de la libertad

y el menor de edad

113

Detención de

A las 4:00 a.m., del nueve de diciembre de dos mil cinco, los policías federales y iniciaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones del , el cual era el domicilio de —a quien había reconocido como uno de sus secuestradores—.

¹¹² Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 878 vuelta a 880 vuelta. El 4 de diciembre de 2005 amplió su declaración ministerial, señalando que había recordado la media filiación de uno de los secuestradores al realizar recorridos en compañía de los agentes federales de investigación por las zonas donde ella transitó el día que la secuestraron. Así fue como alcanzó a identificar a uno de los secuestradores. La víctima reconoció a como la persona cuya descripción recordó. Tras ver varias fotografías reconoció a otros dos sujetos de nombres

y, ambos de apellidos, puesto que se los había presentado su amigo — en una fiesta. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Ampliación de declaración de . Fojas 127 a 134.

¹¹³ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 878 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

A las 4:30 a.m., los policías federales detuvieron a
y a , en la carretera
a la entrada
del ¹¹⁴.

Al respecto, es importante señalar que el **parte original** de los policías señalaba las **5:00 a.m.**, como la hora de inicio del operativo de vigilancia en las inmediaciones del y las **5:30 a.m.**, como la hora de detención de

Sin embargo, con posterioridad al descubrimiento de un video difundido en los medios de televisión sobre su detención, las autoridades policiales iniciaron una averiguación interna de las irregularidades cometidas en ese día, lo que dio lugar a la corrección de la hora, para quedar como hora definitiva de la detención, la de las **4:30 a.m.**¹¹⁵ cuyas horas de inicio y duración descritas son las que el Tribunal Colegiado de Circuito tuvo por ciertas¹¹⁶.

¹¹⁴ La precisión sobre el kilómetro en el cual fue realizada la detención puede verse en: cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia. Fojas 111 vuelta y 247 vuelta.

¹¹⁵ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales de y . Fojas 190 a 194. La aclaración de los tiempos se dio en la diligencia de investigación interna de las irregularidades, el 1° de marzo de 2006. Véase, al respecto: cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: (Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161); (Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172).

¹¹⁶ Véase también: cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 937. El Tribunal Colegiado mencionó que los funcionarios que participaron en la detención se dividieron para llevar a cabo, entre otras, las siguientes funciones: liberar a los secuestrados, inspeccionar el inmueble y dar facilidades a los periodistas de noticias televisadas. Véase: cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 890 a 891 vuelta.

Según lo relataron los policías federales que llevaron a cabo la detención, mientras se dirigían a las instalaciones de la SIEDO, les indicó que debían regresar al

, ya que los integrantes de su banda podían atentar contra la vida de las personas que ahí se encontraban privadas de su libertad. Consecuentemente, los policías federales solicitaron apoyo para dirigirse a rescatar a las personas que presuntamente se encontraban secuestradas en el

¹¹⁷.

Aproximadamente a las 6:15 a.m., una hora y cuarenta y cinco minutos después de la detención, llegaron los elementos de la policía federal y se dirigieron al , al cual llegaron a las 6:30 a.m. En el se encontraban privados de su libertad

y el menor de edad

Hechos que se derivan de un video transmitido por un medio de televisión:

118

A las 6:47 a.m., del viernes nueve de diciembre de dos mil cinco, se interrumpió abruptamente el noticiero

para dar paso a un enlace en vivo y en directo.

reportero del programa, se encontraba fuera del

, en el kilómetro de la carretera

¹¹⁷ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales de y . Fojas 190 a 194.

¹¹⁸ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales de y . Fojas 190 a 194.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

desde donde informa que en esos momentos la entonces Agencia Federal de Investigación (en adelante AFI) está por dar “un duro golpe contra la industria del secuestro”, en virtud de que “van a liberar a tres personas que estaban ilegalmente privadas de su libertad”.

En dicha transmisión se pudo observar a espaldas del reportero, elementos de la AFI fuertemente armados y formados fuera de la propiedad. El inmueble permitió un fácil acceso a los elementos de la policía ya que sus puertas estaban abiertas.

Cuando el reportero empezó a transmitir, los elementos de AFI se introdujeron en el . Ya en el interior, un grupo de estos policías federales se encuentra en una explanada a través de la cual se llega a distintas construcciones. Los agentes se dividieron para revisar las inmediaciones. Mientras tanto, la cámara de televisión enfoca al lado derecho del inmueble donde se encuentra una pequeña de fachada semicircular, cuya puerta estaba abierta al principio, pero es cerrada desde dentro conforme los policías y el reportero se van acercando a dicha construcción.

El reportero que está cubriendo la noticia, informa que este operativo es realizado “prácticamente en vivo”, mientras que en la esquina superior izquierda de la pantalla se aprecia la leyenda “en vivo”.

Conforme a la información que va “conociendo al momento”, el reportero le dice al conductor del programa que en el operativo se pretende rescatar a tres personas: una mujer, su hijo de aproximadamente de edad y un hombre que no tiene ningún vínculo con los demás secuestrados. Además, el reportero informa que “el jefe de la banda es un hombre con una mujer de origen

Una vez que las cámaras se dirigen a la entrada de la cabaña y que cuatro de los elementos de la AFI están formados en posición de vigía y listos para entrar, una persona no uniformada, que viste una gabardina negra, abre la puerta de la cabaña y dirige a los agentes de la AFI, apartándose para permitirles el paso. En el interior la luz es intensa y se percibe que hay muchas personas en dicho espacio, al grado que uno de los agentes de la Agencia Federal de Investigación se tiene que retirar de la cabaña.

Ya dentro de la cabaña, la cámara capta a un hombre tirado boca abajo en el suelo - -, el cual termina siendo sometido y esposado por los agentes federales. En la imagen se observa cómo los agentes de la AFI voltean el cuerpo de este hombre y lo ponen de pie frente a la cámara, mientras lo sujetan por la parte trasera del cuello. La cámara enfoca su cara, mientras el reportero indica que está mostrando a “los secuestradores”.

La cámara comienza a escudriñar los rincones de la cabaña, enfocando un sofá donde las manos del hombre del abrigo negro acomodan dos rifles de alto calibre. El reportero identifica los rifles como "las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas".

A continuación, la cámara gira a la izquierda, enfocando un rincón de la Se observa la cabeza y la espalda de una mujer, quien cubre su rostro con una manta blanca –

–. El reportero indica que ella "es una mujer de origen Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro".

Lo antes narrado aconteció a partir de las 6:47 a.m. y continuó a las 8:53 a.m., momento en el cual los vehículos de la Fuerzas Armadas de la Armada y la Armada se encaminaron a las oficinas de la SIEDO.

El mismo nueve de diciembre de dos mil cinco, a las 10:16 a.m. –cinco horas y cuarenta y cinco minutos después de su detención–, los policías federales pusieron a disposición de la SIEDO a y a

119

¹¹⁹ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Puesta a disposición de la SIEDO de y Fojas 188 y 189.

Con posterioridad a la detención, las primeras diligencias ministeriales consistieron en obtener las declaraciones de los inculpados y de las víctimas del secuestro. Así, el mismo nueve de diciembre de dos mil cinco, a partir de las 10:30 a.m., se obtuvieron las **primeras declaraciones de las personas involucradas**:

Primera declaración de
(coinculpado): en la que señaló que había participado en la comisión de seis secuestros, junto con otras personas, de quienes aportó una breve descripción física además de sus "alias"¹²⁰. Describió su participación, cada vez mayor, en cada uno de los secuestros¹²¹, agregando que

,
y
; fueron sus últimas víctimas. Explicó que el cambio de casa seguridad se debió a que intentó proteger a

para que no le cortaran una oreja, lo que motivó que otro de los secuestradores le dijera que si le importaban tanto las víctimas, mejor se las llevara a su casa. También explicó cómo conoció a

, a quien exculpó de cualquier participación o conocimiento de los secuestros. Explicó que cuando él y

salían del rancho el ocho de diciembre de dos mil cinco (*en su declaración, rendida ese nueve de diciembre, señala que lo detuvieron "ayer"*) fueron detenidos por los agentes de la

¹²⁰ A quienes identificó como: , alias " " ; , alias " " ; (alias " " ; , alias " " (hermano de) ; , alias " " ; y alguien a quien sólo conoció como " " .

¹²¹ Señaló que empezó llevando la comida para las personas secuestradas. En una segunda fase transportaba a la persona encargada de obtener el rescate. Finalmente ya se dedicaba a cuidar a las víctimas, siendo el encargado de tranquilizarlas.

AFI. Finalmente, reconoció como suyos algunos objetos de los que le fueron puestos a la vista¹²².

Primera declaración de

(víctima): señaló que fue secuestrado el diecinueve de octubre de dos mil cinco, cuando se dirigía a la escuela. Durante su cautiverio llegó a percibir la presencia de siete personas en la casa de seguridad en que se encontraba. Narró que uno de los secuestradores –identificado como [redacted] y a quien consideró como el jefe– le sacó sangre del brazo izquierdo, le puso un algodón en el oído izquierdo, después le puso un líquido y una toalla, mientras le indicaba que su padre quería que le enviaran algo. Aclaró que no le hicieron daño, pero le dieron la instrucción de que escribiera una carta a su padre diciendo que a su madre le habían cortado la oreja y que ahuyentara a la policía. Días después los trasladaron a otra casa, donde permaneció hasta el [redacted] su rescate. En la llamada [redacted] identificó a [redacted], por su voz, como la persona que daba las órdenes a los demás miembros de la banda y como la persona que lo cuestionaba, mientras que a [redacted] no la reconoció, físicamente ni por su voz¹²³.

Primera declaración de

(víctima): señaló que el cuatro de octubre de dos mil cinco, fue secuestrado por tres personas en su lugar de trabajo. Indicó que durante aproximadamente un mes estuvo privado de su libertad

¹²² Cuaderno de primera instancia (: /2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 224 a 231.

¹²³ Cuaderno de primera instancia (: /2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 238 a 242. Al momento de los hechos, [redacted] tenía [redacted] años.

en una casa de seguridad, para posteriormente ser trasladado a otra, donde permaneció alrededor de diez días antes de que lo rescataran. Manifestó que durante su cautiverio había una mujer de acento extranjero, al parecer de origen —toda vez que arrastraba la letra “r”, quien le llevaba de comer y en una ocasión le inyectó el dedo meñique con la intención de amputarle un dedo o una oreja. Aclaró que sabía que era mujer por las características de su cuerpo, además de que la había visto con el pasamontañas y unos lentes oscuros, observando que su color de cabello era teñido, al parecer “rojo” y largo. En la *Cámara de Gesell* identificó a [redacted] por su voz como la persona que lo había secuestrado y como el líder de la banda, y también reconoció a [redacted] como la persona que le dio un sándwich y le había inyectado¹²⁴.

Primera declaración de

(víctima): declaró que fue secuestrada el diecinueve de octubre de dos mil cinco, junto con su hijo y su esposo, a quienes ese mismo día dejaron libre con la finalidad de que pagara el rescate a los secuestradores. Indicó que nunca fue objeto de maltrato físico ni abuso sexual. Manifestó que nunca vio el rostro de los secuestradores y no reconoció a [redacted]

[redacted] como uno de ellos, indicando que en la diligencia de reconocimiento era la primera ocasión que veía a [redacted] y que su voz no coincidía con la de los secuestradores. Finalmente,

¹²⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de [redacted] a las 14:00 p.m. Fojas 248 a 255.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

agregó que los oficiales de la AFI le informaron que
había participado en su secuestro¹²⁵.

Primera declaración de : esta
persona, quien no fue rescatada en el ,
señaló que fue secuestrado el diecinueve de octubre de dos mil
cinco, junto con su concubina y su hijo, pero inmediatamente
después fue puesto en libertad por los secuestradores con el
objeto de que reuniera el dinero para pagar el rescate de sus
familiares¹²⁶.

Después de haber obtenido las declaraciones antes
descritas, las autoridades ministeriales afirman que intentaron
comunicarse con la sede diplomática de Francia en la Ciudad de
México, mediante una llamada telefónica realizada a las 15:05
hrs. del mismo nueve de diciembre de dos mil cinco. La llamada
fue atendida, según manifestaron las autoridades, como
consecuencia de haber sido realizada fuera del horario de
atención al público del Consulado General¹²⁷.

¹²⁵ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de a
las 14:00 p.m. Fojas 256 a 259.

¹²⁶ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de
Fojas 260 a 265.

¹²⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 958;
y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada francesa. Foja 279. La
transcripción íntegra de la constancia ministerial sobre este suceso, la cual se analizará en el
estudio de fondo, es la siguiente: "En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 15:05
quince horas con cinco minutos del día 09 de diciembre del año en curso, la suscrita Licenciada
NORA CABALLERO TREJO, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad
Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 206 y
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.--- HACE CONSTAR.--- Que siendo y el día y
la hora arriba señaladas, con la finalidad de comunicar a la Embajada de Francia que se encuentra
a disposición de Autoridad Federal, quien
manifiesta ser de nacionalidad se obtuvieron mediante el teléfono 040 del sistema de
información de Teléfonos de México, los números telefónicos: y :
los cuales corresponden a la Embajada de Francia en México siendo en el último en el cual se
obtuvo contestación de una grabación en idioma francés y luego su traducción en idioma español,
en la cual se señalaba que el horario de atención era de lunes a jueves de 08:15 ocho horas con

A las 15:10 hrs., del nueve de diciembre de dos mil cinco y sin que la quejosa hubiese podido comunicarse con algún funcionario consular de su país, el Ministerio Público obtuvo la primera declaración de _____, quien rindió su primera declaración en compañía de dos testigos y del perito profesional en materia de traducción del idioma adscrito a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la SIEDO de la Procuraduría General de la República. Asimismo, se le nombró como defensor público federal a _____

Primera declaración de

_____ : la ahora recurrente describió su llegada a México, los viajes que realizó a _____ los lugares donde trabajó _____ su relación con _____, a quien describió como una persona violenta y prepotente. Indicó que _____ salía frecuentemente a realizar diversas actividades, sobre las _____ no daba explicaciones. Describió cómo en los días previos a la detención, _____ controlaba su entrada al _____. Agregó que, también en ese tiempo, se quedó en el _____ un hombre a quien conocía anteriormente y al que le llamaban _____, quien pedía y consumía mucha comida (mencionó específicamente huevos, cereal y leche). Asimismo, señaló que *"el día de (su) detención (...) una camioneta se cruzó en su camino y fueron abordados por gente de la Agencia Federal de Investigación"*.

quince minutos a las 14:15 catorce horas quince minutos y el día viernes 8:45 ocho cuarenta y cinco a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos. Siendo todo lo que tienen que hacer constar, con lo cual se da por terminada la presente diligencia firmando al calce el personal de actuaciones".

relató que un policía federal le indicó que se dedicaba al secuestro y que de la investigación se desprendía que ella no tenía nada que ver con los delitos que aquél había cometido. También expresó que, a pesar de lo anterior, cuando la trasladaron al

fue introducida en un cuarto ubicado a la derecha de la entrada principal, habitación en la cual se encontraba una persona que estaba vendada en la frente y que le reclamaba a por haberlo tratado mal. Asimismo, escuchó la voz de una mujer que pedía ir al baño. Igualmente denunció a una persona –al parecer encargada de la operación que llevó a su detención–, ya que le había dado instrucciones de cómo debía actuar cuando llegaran los medios de comunicación, lo que incluía expresar que ella sabía de los secuestros. Dicha persona le había dado un golpe en la cabeza y jalado el cabello. Por último, declaró que no traía consigo ni portaba arma de fuego alguna y que no tuvo participación en el secuestro de las tres personas liberadas en el ni en ningún otro¹²⁸.

Obtenida la declaración antes descrita, el mismo nueve de diciembre de dos mil cinco, el Ministerio Público de la Federación solicitó el arraigo de , por un plazo de noventa días, en el Centro de Investigaciones Federales, con la finalidad de llevar a cabo diversas diligencias que permitieran acreditar el cuerpo del delito¹²⁹.

¹²⁸ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de . Fojas 282 a 290.

¹²⁹ Cuaderno de primera instancia /2006-IV). Tomo I. Solicitud de arraigo. Fojas 347 a 397. La solicitud de arraigo se efectuó mediante oficio SIEDO/UEIS de 9 de diciembre de 2005.

El ocho de febrero de dos mil seis, compareció en las oficinas del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO, la señora

Segunda declaración de

dentro de la diligencia de reconocimiento de un inmueble: al comparecer para reconocer una casa de seguridad ubicada en narró cómo su hijo le contó que, cuando le habían sacado sangre, fue un hombre quien lo sacó del cuarto, pero que fue una mujer que hablaba con acento raro –pues no pudo pronunciar la palabra “aprieta” cuando le pidió que cerrara el puño–, y cuyas manos eran de una persona blanca y muy bonitas, quien llevó a cabo dicha acción. Además de narrar lo que su hijo le contó, reconoció el inmueble objeto de la diligencia como la primera casa de seguridad donde estuvo en cautiverio¹³⁰.

El diez de febrero de dos mil seis, voluntariamente se presentó en la Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO, ¹³¹, un nuevo testigo, quien declaró lo siguiente:

¹³⁰ Cuaderno de primera instancia (I/2006-IV). Tomo III. Comparecencia de Reconocimiento de Inmueble por parte de . Fojas 294 a 296.

¹³¹ Esta Primera Sala advierte que a lo largo del expediente, el primer apellido del testigo aparece escrito como “ ”, “ ” y “ ”, sin embargo, a efectos de la presente sentencia, se utilizará “ ” por corresponder a lo asentado en su credencial para votar. Véase el cuaderno de primera instancia (I/2006-IV). Tomo III. Copia de la identificación del testigo z. Foja 325.

Primera declaración de

manifestó que conocía a porque era cliente de su puesto de verduras. Cuando la señora le platicó que había sido secuestrada, él recordó que había visto en la televisión a los secuestradores y que le parecía conocida la mujer que presentaban como responsable del secuestro.

indicó que esa persona había estado siguiendo a la señora , aclarando que la recordaba como una . Posteriormente reconoció a por las fotografías que le mostró el Ministerio Público¹³².

El catorce de febrero de dos mil seis, compareció

a la Subagregaduría Regional de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en San Diego, California, Estados Unidos de América, para ampliar su declaración:

Segunda declaración de

señaló que el día que le sacaron sangre del brazo izquierdo se percató de que la mano que sintió era

diferente a las anteriores manos que lo habían tocado. Agregó que había escuchado a la mujer que lo había inyectado, la cual tenía un tono de extranjera, con acento raro. Indicó que le contó lo ocurrido a su madre. Por último, identificó la voz de

¹³² Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Declaración de Fojas 321 a 324. El testigo falleció el 21 de mayo de 2006 en un accidente automovilístico. Consecuentemente, se desistió de la prueba ofrecida, ante la imposibilidad material que existía, para desahogar la ampliación de declaración de Cuaderno de primera instancia /2006-IV), Tomo X. Proveído desistimiento de prueba. Foja 601.

como la de la persona que le había sacado sangre, reconociendo su voz en los noticiarios que pasan en la televisión¹³³.

Al día siguiente, es decir, el quince de febrero de dos mil seis, se presentó en la Subagregaduría Regional de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en San Diego, California, Estados Unidos de América, para ampliar su declaración:

Tercera declaración de : señaló que mientras estuvieron en cautiverio en las dos casas de seguridad, su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la reconocieron en los noticiarios, es la de . Consecuentemente, identificó a la quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad¹³⁴.

El uno de marzo de dos mil seis, los policías federales que participaron en la detención de comparecieron ante el Agente del Ministerio Público de la Federación visitador adscrito a la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI.

Los policías federales señalaron que hubo un error en el oficio de puesta de disposición de

¹³³ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Ampliación de declaración de . Fojas 370 a 375.

¹³⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Ampliación de declaración de . Fojas 379 a 386.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

ante el Ministerio Público, toda vez que su detención no ocurrió a las 5:00 a.m., del día nueve de diciembre de dos mil cinco, sino entre las 4:00 a.m., y las 4:35 a.m., de ese día, e igualmente indicaron que el rescate de las víctimas ocurrió aproximadamente entre las 6:25 a.m., y las 6:30 a.m., del nueve de diciembre de dos mil cinco, agregando que fue quien permitió el acceso al y que, posteriormente, e

fueron conducidos al lugar donde se encontraban las víctimas, donde permanecieron durante el operativo¹³⁵.

También el uno de marzo de dos mil seis, se presentó en las oficinas de la SIEDO a fin de realizar su segunda declaración. Ahí reconoció, a través de la Cámara de Sesell, a como la persona que seguía a . Agregó que reconocía su su aspecto físico, ya que iba a su puesto a comprar frutas o verduras¹³⁶

El tres de marzo de dos mil seis, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO determinó ejercer la facultad de atracción en cuanto a los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, en agravio de

¹³⁵ Cuaderno de primera instancia (i/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: (Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161); Carlos Servín (Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172).

¹³⁶ Cuaderno de primera instancia i/2006-IV). Tomo III. Declaración de Fojas 476 y 477.

137.

El siete de junio de dos mil seis, ampliaron sus declaraciones ministeriales y a través del sistema de videoconferencia, en las oficinas de la Agregaduría en México con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, ante la presencia del Cónsul General de México en esa ciudad:

Cuarta declaración de : agregó que estuvo en cautiverio durante cincuenta y dos días y que a la recuerda en la segunda casa de seguridad, ya que en una ocasión les llevó comida y pudo verla. Fue en un momento en que no estaba siendo vigilada, por lo que pudo percatarse de la presencia de una mujer que portaba un pasamontañas y que tenía el pelo . A continuación declaró que los secuestradores abusaron de ella¹³⁸. Asimismo, al responder a las preguntas realizadas por los representantes legales de y por el A del Ministerio Público, manifestó que: (i) supo la hora del rescate ya que cuando llegaron los policías de la AFI era de noche y poco tiempo después amaneció; (ii) se enteró de que era el jefe de la banda de secuestradores porque las otras personas le tenían mucho respeto y le decían “patrón”; (iii) reconoció la voz de por ser “inconfundible”; (iv)

¹³⁷ Cuaderno de primera instancia (: /2006-IV). Tomo III. Acuerdo en el que se ejerce la facultad de atracción. Fojas 489 a 492.

¹³⁸ Cuaderno de primera instancia (: /2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de i. Foja 659 vuelta.

cuando reconoció a _____ en la
Cámara de Gesell se encontraba acompañada de

_____, _____ y _____; (v)
no recordaba exactamente cuántos días estuvo en la segunda
casa de seguridad (vi) escuchó a una mujer en las dos casas de
seguridad pues saludaba a las víctimas y a los secuestradores,
misma cuya complexión física recuerda. Por último, y ante la
pregunta sobre la cantidad de pelo que le sobresalía del
pasamontañas a la mujer que vio durante su cautiverio, la señora
señaló que solamente un mechón de pelo _____ 39.

Tercera declaración de _____ :

agregó que _____ dio la orden de sacarle sangre y que
_____ quien le dijo que
_____ amartara el puño, ya que tenía una voz cuyo acento no
identificaba en ese entonces, pues desconocía el acento _____,
_____ le describió a su madre¹⁴⁰. Al contestar las preguntas
_____ hechas por los representantes legales de
_____ y por el Agente del Ministerio Público,
explicó que: (i) le dijeron que harían un molde de su oreja para
enviárselo a su padre; (ii) lo amenazaron con cortarle una oreja si
su padre no pagaba el rescate; y (iii) que en el noticiario de la
noche del nueve de diciembre de dos mil cinco, reconoció la voz
de _____ 141.

¹³⁹ Cuaderno de primera instancia (/ 2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de
657 vuelta y 660 a 664.

¹⁴⁰ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de
Foja 664 vuelta.

¹⁴¹ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de
Fojas 664 vuelta a 667 vuelta.

**Conferencia de prensa de diez de febrero de dos mil
seis¹⁴².**

Conferencia de prensa convocada por la Procuraduría General de la República el viernes de diez febrero de dos mil seis. Las autoridades que se encontraban presentes —el Procurador General de la República, el Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y el Titular de la Agencia Federal de Investigación—, fueron confrontadas con múltiples preguntas relativas a los supuestos montajes realizados por la Agencia Federal de Investigación y la forma en la que han afectado a los procesos penales, enfatizando en lo ocurrido en los casos de secuestro y principalmente en el de

Ante la presión de los reporteros y su inquietud sobre el tema, las autoridades aclararon que, en realidad, los medios de comunicación no estuvieron presentes durante la detención de los inculcados ni al momento de la liberación de las víctimas.

José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, señaló que debido al éxito que la entonces Agencia Federal de Investigación había tenido en múltiples casos de liberación de víctimas del secuestro, esto había despertado el interés de los medios de comunicación. En esta lógica, aceptó que las

¹⁴² Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VII. Prueba documental 19 consistente en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Foja 793. Aunado a lo anterior, la transcripción de la sesión de preguntas y respuestas se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico de la Procuraduría General de la República <http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/coms06/> .htm. Último acceso el 23 de febrero de 2012.

imágenes transmitidas en televisión no reflejaban el momento real de la detención y rescate de las víctimas, pues sería irresponsable que los medios acompañasen a los agentes en el momento en que se realizan infiltraciones y rescates. A continuación aclaró que este tipo de transmisiones televisivas no inciden jurídicamente en los procesos y que no tenían ninguna importancia.

Cuando los periodistas señalaron que, tanto en México como en Francia, existían voces que insistían en que la Agencia Federal de Investigación recreó el momento de la captura para fines de publicidad televisiva, Genaro García Luna, Director General de la AFI, sostuvo que "en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso (...) en una entrevista" y agregó que la escenificación se realizó a petición de los medios a fin de mostrar cómo fue el ingreso a la casa de seguridad¹⁴³.

SEXTO.- Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima fundados y suficientes los agravios de la quejosa, ahora recurrente, para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, por las razones que a continuación se precisan:

¹⁴³ Las palabras literales del Director General de la Agencia Federal de Investigación fueron las siguientes: "En el tema de imágenes, que es un poco la inquietud que ustedes tiene, en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso, se explicó en una entrevista a petición de ustedes nosotros mostramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad". Cuaderno de primera instancia (i/2006-IV). Tomo VII. Prueba documental 19 consistente en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Aunado a lo anterior, la transcripción de la sesión de preguntas y respuestas se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico de la Procuraduría General de la República <http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/coms...:htm>. Último acceso el 23 de febrero de 2012.

En efecto, por lo que ve a los motivos de inconformidad en los que sostiene la violación grave a sus derechos fundamentales, acontecida en la etapa de la averiguación previa; se estiman fundados por las razones que a continuación se expresan:

El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público.

Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que:


“cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”¹⁴⁴.

A nivel de la legislación federal también se encuentra previsto este derecho en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que:

“el indiciado deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente

¹⁴⁴ La actual redacción de esta porción normativa del artículo 16 constitucional fue modificada a través de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. En el momento de los hechos, el mandato en estudio se encontraba ubicado en el párrafo cuarto del artículo 16 y establecía lo siguiente: *“En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”. En cualquier caso, lo relevante es que el mandato de puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público también se encontraba vigente en el momento de los hechos.*

(...) Las autoridades que realicen cualquier detención o aprehensión deberán informar por cualquier medio de comunicación y sin dilación alguna, a efecto de que se haga el registro administrativo correspondiente y que la persona sea presentada inmediatamente ante la autoridad competente. La autoridad que intervenga en dicha detención elaborará un registro pormenorizado de las circunstancias de la detención. Desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, se deberán respetar los derechos fundamentales del detenido. El Ministerio Público constatará que los derechos fundamentales del detenido no hayan sido violados. La violación a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será causa de responsabilidad penal y administrativa”.



Es importante precisar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del dieciocho de enero de dos mil doce, por unanimidad de cinco votos, el caso en revisión 517/2011, bajo la ponencia del señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, ya se pronunció respecto del alcance del término “sin demora” referido en el cuarto párrafo del artículo 16 de la norma constitucional, al sostener que de acuerdo a la constitución, el régimen general de la protección contra detenciones exige que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible. Es decir, la persona debe ser puesta a disposición de la autoridad ministerial sin dilaciones injustificadas.

En el precedente citado, esta Primera Sala precisó que si bien no es posible ni sería adecuado fijar una regla de temporalidad que defina el concepto “sin demora” aplicable a la presentación del detenido ante el Ministerio Público, no se sigue

que no sea posible adoptar un estándar que posibilite al juez calificar cada caso concreto de un modo sensible a dos necesidades: la de no dilatar injustificadamente la puesta a disposición de la persona detenida, porque esto da lugar a la restricción de la libertad personal sin control y vigilancia del Estado; y, las peculiaridades de cada caso en concreto, como la distancia que existe entre el lugar de la detención y la agencia del Ministerio Público.

La Sala concluyó que tal circunstancia se actualiza siempre que, no existan motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Y los motivos razonables únicamente pueden tener origen en impedimentos fácticos reales y comprobables.

Lo anterior implica que debe presentarse al detenido ante el Ministerio Público en cuanto sea posible, a menos que exista un impedimento razonable que no resulte contrario al margen de facultades constitucionales y legales a cargo de la policía, quien no debe retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigaciones pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica —de la cual depende su restricción temporal de libertad personal—.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

Dicho criterio fue reiterado por esta propia Sala al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo en revisión 145/2012 en sesión del seis de junio de dos mil doce.

Por lo anterior, es claro que resulta incorrecto lo sostenido por el Tribunal Colegiado respecto al entendimiento de la obligación constitucional de poner a disposición al detenido "sin demora" ante el Ministerio Público, ya que en este aspecto afirmó que si bien la quejosa no fue puesta a disposición de la autoridad competente inmediatamente, el reclamo al respecto resultaba inoperante, porque la demora obedeció a causas de fuerza mayor, como preservar la vida e integridad física de las víctimas y proporcionarles atención médica y psicológica urgente después de rescatarlas y concluyó que a pesar de existir un lapso considerable de tiempo, desde la detención de la quejosa hasta que fue puesta a disposición del Ministerio Público, no existía violación al artículo 16 constitucional, porque al no existir una lógica de medir en horas y minutos los términos "inmediatamente" o "sin dilación", en la valoración correspondiente tiene que apreciarse en conciencia las circunstancias particulares del caso.¹⁴⁵

Ahora bien, tomando en consideración que quedó demostrado en el sumario que siendo las 4:00 horas del día nueve de diciembre de dos mil cinco, los policías federales _____ y _____, iniciaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones del _____, el cual era el domicilio de _____

¹⁴⁵ Página 1480 de la resolución del juicio de amparo directo 145/2010.

Cisneros dado que una persona del sexo femenino lo había reconocido como uno de sus secuestradores.

Que a las **4:30** horas, los policías federales detuvieron a _____ y a _____, en la carretera federal libre _____ en el kilómetro _____ a la entrada del _____

La hora antes precisada, se deriva del descubrimiento de un video difundido en los medios de televisión respecto de la detención de la quejosa, debido al cual las autoridades policiales iniciaron una averiguación interna de las irregularidades cometidas en ese día, lo que dio como resultado que se estableciera como hora definitiva de la detención, las **4:30 a.m.**

Que de acuerdo al relato de los policías federales que llevaron a cabo la detención, mientras se dirigían _____ las instalaciones de la SIEDO, _____ les indicó que _____ debían regresar al _____, ya que los integrantes de su banda podían atentar contra la vida de las personas que _____ se encontraban privadas de su libertad. Consecuentemente, los policías federales solicitaron apoyo para dirigirse a rescatar a las personas que presuntamente se encontraban secuestradas en el _____

Que aproximadamente a las **6:15** horas, esto es, una hora y cuarenta y cinco minutos después de la detención, llegaron los elementos de la policía federal y se dirigieron al _____, al cual llegaron a las **6:30** horas. En cuyo lugar se _____

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

señaló que se encontraban privados de su libertad

y el menor

de edad

Que de acuerdo al video difundido por un medio de televisión, el rescate de las personas que se encontraban privadas de su libertad, se llevó a cabo a partir de las **6:47** horas y concluyó a las **8:53** horas, momento en el cual los vehículos de la Agencia Federal de Investigaciones se encaminaron a las oficinas de la SIEDO.

Que **cinco horas y cuarenta y cinco minutos después de su detención** los policías federales pusieron a disposición de la SIEDO a

Y finalmente, que el **Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada**, aceptó que las imágenes transmitidas en televisión **no reflejaban el momento real de la detención y rescate de las víctimas**, en tanto que el **Director General de la AFI**, sostuvo que **“en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso (...) en una entrevista”** y agregó que **la escenificación se realizó a petición de los medios a fin de mostrar cómo fue el ingreso a la casa de seguridad**¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Las palabras literales del Director General de la Agencia Federal de Investigación fueron las siguientes: *“En el tema de imágenes, que es un poco la inquietud que ustedes tiene, en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso, se explicó en una entrevista a petición de ustedes nosotros mostramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad”*. Cuaderno de primera instancia (I/2006-IV). Tomo VII. Prueba documental 19 consistente en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Aunado a lo anterior, la transcripción de la sesión de preguntas y respuestas se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico de la Procuraduría General de la República <http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/coms/...:htm>. Último acceso el 23 de febrero de 2012.

Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima **que en el caso se violó flagrantemente el derecho constitucional de la quejosa detenida a ser puesta de inmediato disposición del Ministerio Público.**

Se arriba a esa convicción, porque de ninguna manera puede justificarse la demora en la puesta de la quejosa a disposición del Ministerio Público, en el hecho de transmitir públicamente una supuesta detención, posterior al rescate de las víctimas; dado que jamás puede considerarse de mayor entidad el interés de los medios de comunicación en el éxito que había tenido la entonces Agencia Federal de Investigación, en los diversos casos en que se liberaron a las víctimas de secuestro, así como la información a las sociedad de estos hechos, que el mayor bien jurídico de que puede disponer una persona, como es su libertad personal.

Y si bien es cierto, los policías federales que llevaron a cabo la detención, mencionaron que cuando llevaban a los detenidos a las instalaciones de la SIEDO, les indicó que debían regresar al [redacted] ya que los integrantes de su banda podían atentar contra la vida de las personas que ahí se encontraban privadas de su libertad, por lo que procedieron a trasladarse a este lugar; no menos lo es, que en ningún momento quedó demostrado en autos que en el lugar donde fueron localizadas las víctimas, se encontraran las personas que según ellos les refirió [redacted] y que hiciera presumir

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

fundadamente que aquéllos peligraban en su integridad personal, tan es así que en el referido operativo policiaco, se señaló que sólo se obtuvo la detención del citado y de la ahora quejosa, lo que como se precisó con anterioridad, ya se había logrado desde las cuatro horas con treinta minutos de ese día.

Esto es, no existe duda que la referida retención obedeció al hecho de transmitir públicamente, a través de un medio de televisión, la supuesta detención que se dijo- se estaba llevando a cabo de las personas que se relacionaban con el delito, lo que como quedó establecido en el expediente penal, ya había acontecido con anterioridad al referido rescate, cuyo hecho fue reconocido por los funcionarios públicos encargados del operativo, quienes inclusive reconocieron que las imágenes transmitidas en televisión no reflejaban el momento real de la detención y rescate de las víctimas.

Esta actuación irregular de la autoridad, tuvo como resultado la violación de un derecho tan valioso como el de la libertad personal de la quejosa, al no existir un motivo razonable que imposibilitara su puesta a disposición inmediata ante la autoridad investigadora, lo que trajo como consecuencia que los agentes aprehensores le restringieran injustificadamente su libertad por varias horas sin control y vigilancia del Estado; no obstante que por mandato constitucional, la policía investigadora no podía retenerla por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerla a su disposición, a efectos de que se desarrollaran las diligencias de investigaciones pertinentes e inmediatas, que permitieran definir

su situación jurídica —de la cual lógicamente dependía esa restricción temporal de libertad personal—.

En las relatadas circunstancias, el hecho de que las autoridades permitieran transmitir públicamente la supuesta detención de la quejosa, a través de un medio de televisión, trajo como consecuencia que entre el lapso en que efectivamente fue detenida (4.30 horas) y su traslado a fin de ser puesta a disposición del Ministerio Público (8.53 horas), transcurrieran cinco horas con cuarenta y cinco minutos; y ello, se reitera, **constituye una violación constitucional grave consistente en la demora injustificada en la puesta de la detenida a disposición del Ministerio Público, por vulnerar lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal.**

El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular.

En el marco de un sistema democrático, una vez una persona se encuentra en territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos. Uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre.

En nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 36, párrafo primero, de la

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares¹⁴⁷. Esta norma dispone lo siguiente:

“Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello”.

¹⁴⁷ Ratificada por el Estado mexicano el 18 de mayo del 1965 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 1967.

De conformidad con el texto vigente del artículo 1° constitucional, el orden jurídico mexicano cuenta con una protección mayor en relación a los derechos fundamentales. Este nuevo paradigma implica que, en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y (ii) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano¹⁴⁸, por lo que resulta incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país.

Asimismo, este derecho también se encuentra consagrado a nivel de la legislación federal, en específico, en la fracción IV, del

¹⁴⁸ Tesis Aislada XIX/2011 (10ª) cuyo rubro es: "*PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE*", derivada del amparo directo 2010, resuelto el 23 de noviembre de 2011. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que cuando una persona extranjera fuese detenida, este acto “se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda”¹⁴⁹.

¹⁴⁹ La importancia de este artículo resulta trascendental en la regulación del procedimiento penal federal, ya que establece los derechos del detenido. El texto completo del artículo es el siguiente:

Artículo 128.- Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido, el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público, se asentará o se agregará, en su caso, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido;

II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante;

III.- Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:

a) Declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;

b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no pudiere o no pudiese designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;

c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;

d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;

e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y

f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 de este Código. Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes. De la información al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las actuaciones.

IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. **Si se tratare de**

Una de las funciones primordiales de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los connacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Así, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es el resultado de un consenso internacional: los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al momento de ser detenidos por una autoridad y someterse a un proceso penal bajo las normas de un ordenamiento jurídico que les resulta extraño.

El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular representa el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas del derecho internacional. Por un lado, afianzar el papel de las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen y, por el otro, la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido proceso.

A pesar de que el propio nombre de la *Convención de Viena sobre Relaciones Consulares* no sugiere que sea un tratado cuya materia sean los derechos humanos, el artículo 36 consagra no solamente la facultad de los cónsules para comunicarse y asistir a sus connacionales detenidos, sino que también comprende los

un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y

V.- En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

derechos fundamentales de los extranjeros a ser informados, de forma inmediata, que son titulares del derecho a comunicarse con sus respectivos consulados y a recibir su asistencia si así lo solicitan.

Si bien es cierto que la ayuda consular para los connacionales detenidos puede asumir diversas formas, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas¹⁵⁰. La primera es de carácter *humanitario*. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es de *protección*. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una *asistencia técnico-jurídica*, respecto a la cual nos ocuparemos más adelante, ya que resulta uno de los puntos fundamentales para resolver el asunto que nos ocupa.

¹⁵⁰ Véanse, por todos, Michael Fleishman, "Reciprocity Unmasked: the role of the Mexican Government in defense of its foreign nationals in United States death penalty cases", *Ariz. J. Int'l & comp. L.* 2003; Mark J. Goldsmith, "_____ v. State No. PCD-04-442 (Okla. Crim. App. May 13, 2004) (order granting stay of execution and remaining case for evidentiary hearing)", *17 Cap. Def. J.* 2004-2005; Verónica Gómez, "The Inter-American System: Recent Cases", *Human Rights Law Review*, Volume 1, Number 2 -2001; Dinah L. Shelton, "Case _____ (_____)", *American Journal of International Law* 2004; Jeremy White, "A New Remedy Stresses the Need for International Education: the impact of the *Lagrand* case on domestic court's violation of foreign national's consular relations rights under the Vienna Convention", *2 Was. U. Global Stud. L. Rev* 2003; Kweku Vanderpuye and Robert W. Bigelow "The Vienna Convention and the Defense of Noncitizens in New York: A Matter of Form and Substance", *Pace Int'l L. Rev* 2006; y Arwa J. Fidhusein, "VCCR Article 36 Civil Remedies and Other Solutions: a Small Step for Litigants but a Giant Leap Towards International Compliance", *Seton Hall Circuit Review* 2008.

Por el momento, lo que resulta de vital importancia es señalar que a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos.

La asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta¹⁵¹.

La importancia del derecho fundamental que venimos tratando ha sido reconocida por diversos tribunales internacionales, específicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Internacional de Justicia; curiosamente, como resultado de dos peticiones del gobierno de nuestro país.

¹⁵¹ Véanse, por todos, Sarah M. Ray, "Domesticating International Obligations: How to Ensure U.S. Compliance with the Vienna Convention on Consular Relations". *California Law Review*, December 2003; Janet K. Levit, "Does Medellín Matter?". *Fordham Law Review* 2008; Marshall J. Ray, "The Right to Consul and The Right to Counsel: a Critical Re-Examining of State v. Martinez-Rodriguez". *New Mexico Law Review*, 2007; Howard S. Schiffman, "The Lagrand Decision: The Evolving legal Landscape of the Vienna Convention on Consular Relations in U.S. Death Penalty Cases". *Santa Clara Law Review* 2002; Aparna Sridhar, "Creating Judicial Remedies for Violations of the Vienna Convention on Consular Relations: A Proposed Resolution to Medellín v. Dretke". *Stanford Journal of Civil Rights and Civil Liberties*, Vol. II:2, 2006; y Jennifer Goodman, " (Mex v. U.S.). The International Court of Justice Deems U.S. Actions in Fifty-Two Death Penalty Cases as Violations of International Law". *Tulane J. of Int'l Comp. Law*, Vol. 13, 2005.

La Opinión Consultiva OC-16/99 fue emitida el 1 de octubre de 1999 y lleva por título "*El derecho a la información sobre la asistencia consular y su relación con las garantías mínimas del debido proceso legal*"¹⁵². En esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a solicitud de México—, interpretó el espectro del artículo 36 de la Convención de Viena, con la finalidad de clarificar los derechos y obligaciones establecidas por la Convención de Viena, poniendo énfasis en la aplicación de este derecho en los casos de pena de muerte en los Estados Unidos de América¹⁵³.

En esta resolución, la Corte Interamericana no dudó en señalar que el derecho a la asistencia consular, tal como lo dispone el artículo 36 de la Convención de Viena, es parte del *corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo*, ya que dota a los extranjeros detenidos de

152. Corte IDH. *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1° de octubre de 1999. Serie A No. 16.

153. El Estado mexicano solicitó esta consulta a raíz de la representación que había realizado respecto a algunos de sus nacionales, alegando que las autoridades estadounidenses no les habían informado sobre su derecho a comunicarse con los funcionarios consulares mexicanos y que los procesos habían culminado con sentencias de pena de muerte. Como los Estados Unidos de América no han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, México decidió solicitar una opinión consultiva de conformidad con el artículo 64 de la Convención Americana.

Es pertinente recordar que, a través de la competencia consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede abordar la interpretación de un tratado siempre que tenga implicaciones en la protección de los derechos humanos en un Estado miembro del sistema interamericano, aunque dicho instrumento no provenga del mismo sistema regional de protección. Véase: Corte IDH. "*Otros Tratados*" *Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982 (solicitada por el Perú). Serie A No. 1, fundamento 38.

Volviendo al contenido de la Opinión Consultiva OC-16/99, doce preguntas, divididas en tres secciones, fueron planteadas por México: las preguntas uno a cuatro componen el primer grupo, en el que se le pide a la Corte Interamericana que determine si, a la luz del artículo 64.1 de la Convención Americana, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares debe ser interpretado en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. Las preguntas cinco a diez componen un segundo grupo, relativo a si dentro del marco del artículo 64.1 de la Convención Americana debe interpretarse que los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos contienen disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Las preguntas once y doce comprenden el último grupo y conciernen a la interpretación de la Declaración Americana y de la Carta de la OEA y su relación con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Véase Opinión Consultiva OC-16/99.

derechos individuales que son la contraparte de los deberes correlativos del Estado anfitrión¹⁵⁴. Asimismo, la Corte Interamericana señaló que resulta indispensable tomar en cuenta las circunstancias de desventaja en las que se encuentra un extranjero, por lo que la notificación del derecho a comunicarse con el representante consular de su país contribuye a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y a que los actos procesales en los que interviene se realicen con mayor apego a la ley y respeto a la dignidad de las personas. Consecuentemente, la Corte Interamericana concluyó que el derecho individual a la notificación consular debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo¹⁵⁵.

En esta misma línea, y también a petición del gobierno mexicano, la Corte Internacional de Justicia, en el llamado caso *Arce*, reconoció que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares consagra un verdadero derecho fundamental para los individuos detenidos en el extranjero y que los Estados deben propiciar todas las medidas posibles que otorgue su ordenamiento jurídico a fin de reparar a los extranjeros las violaciones a este derecho¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Véase Opinión Consultiva OC- /99, párrafo 29.

¹⁵⁵ Véase Opinión Consultiva OC- /99, párrafo 122.

¹⁵⁶ Corte Internacional de Justicia, *Caso referente a y a otros* (v.), sentencia de 31 de marzo de 2004. En este caso la Corte Internacional de Justicia retomó la doctrina establecida en el Caso (,), sentencia de 27 de junio de 2001.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

Ahora bien, sentadas estas cuestiones es necesario que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca cuáles son los *derechos específicos* que se derivan de lo contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

En primer lugar, es necesario que las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia.

En segundo lugar, el extranjero tiene el derecho de decidir si desea o no contactar con su respectivo consulado.

En tercer lugar, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar con la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva.

Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata y efectiva.

Este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben ser especificadas.

Es necesario reconocer la especial proyección que tiene la exigencia de asistencia consular en el proceso penal debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden verse afectados.

Como se precisó con anterioridad, la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, con la finalidad de evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero. En esta lógica, la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural del mismo.

Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede ser concebido como un mero requisito de forma. Cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero la posibilidad de suplir sus carencias a través de los medios que el artículo 36 de la Convención de Viena pone a su disposición, no solo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada.

Para el detenido extranjero, el derecho a la asistencia consular tiene una función propia y diferenciada tanto del derecho

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

a tener un abogado como del derecho a tener un traductor o intérprete.

La asistencia consular no se reduce a una simple medida de comunicación entre el extranjero y un representante de su gobierno. Es ante todo un derecho fundamental reconocido para evitar la indefensión del inculpado, que no depende de los conocimientos que tenga el extranjero del idioma del país en el que ha sido detenido.

El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer término, de que el extranjero no sea simplemente informado de la acusación y de los derechos que le asisten, sino los comprenda cabalmente.



La comprensión del significado gramatical de las palabras que contiene la acusación puede ser facilitada por un traductor. Es más, una explicación técnica de las implicaciones de la acusación puede ser facilitada por un abogado que esté habilitado para ejercer en ese país. Sin embargo, esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada.

A fin de que se considere que un extranjero ha sido informado de forma libre y consciente de estas cuestiones, es indispensable que se encuentre cubierto el elemento relativo a la idiosincrasia cultural. La herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al momento de comprender cualquier

fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto a aquellos actos que impliquen la privación de la libertad.

En algunos ordenamientos jurídicos, la declaración ante los agentes de policía y la colaboración con las autoridades que investigan un delito puede ser considerado a lo largo del proceso como una muestra de buena voluntad por parte del detenido. Por el contrario, en otros sistemas, resulta recomendable que los inculcados no externen ningún comentario hasta que se encuentren en presencia de un juez. Asimismo, en ciertos ordenamientos jurídicos, cooperar con la policía y aceptar determinados hechos puede ameritar, a futuro, una reducción de condena. En otros, resulta irrelevante la confesión espontánea del inculcado.

Estas cuestiones, como es lógico, no son conocidas ni debidamente ponderadas por los abogados nacionales. Este tipo de decisiones solo pueden ser tomadas una vez que el detenido ha recibido una efectiva asistencia técnica, la cual debe ser otorgada por los funcionarios consulares, quienes por su actividad profesional presumiblemente se encuentran debidamente capacitados para dicha tarea.

Es importante subrayar que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no habla sólo de *contacto*, sino de *asistencia*, de donde se infiere que lo que la Convención dispone es que el detenido tiene derecho a gozar de una asistencia técnica que sea real y efectiva.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

El señalado artículo 36 de la Convención de Viena, no es una regla equiparable a la formalidad esencial del procedimiento de origen interno creada por el Legislador nacional en los casos de procesos penales seguidos contra extranjeros prevista en el artículo 128, fracción IV, in fine, del Código Federal de Procedimientos Penales, sino un Derecho Humano Fundamental contenido en tratado internacional con finalidades y alcances diversos.

La recta interpretación de dicho artículo 36 —considerando su formación entre sujetos y argumentos típicos de Derecho Internacional— presupone que se trata de una regla de aplicación especial en procesos penales seguidos contra individuos en naciones extranjeras; su aplicación implica reconocer la existencia de una regla adicional de origen internacional que opera paralelamente a la legislación nacional cuya función consiste en introducir en los operadores jurídicos la noción de que, el proceso que se sigue a un no nacional necesariamente se encuentra caracterizada por una situación de potencial inseguridad jurídica si se actúa sin consideración de este fundamento; y es que una persona que se encuentra fuera de su país, al ser sujeto a proceso penal estará fuera de la aplicación de la esfera de derechos que le pertenecen y le son conocidos en función de su país de origen; en este contexto, prácticamente a dicho sujeto foráneo se le juzgará penalmente mediante la aplicación de una diversa esfera de derechos a la suya y por una jurisdicción extranjera que le es ajena, con todo lo cual no se encuentra familiarizado. El tomar como premisa y comprender esta

situación, es decir, que las personas pertenecen a un Estado determinado (calidad de nacional), presupone admitir que ellas tienen un conocimiento —al menos superficial— de sus formas y procedimientos jurídicos que les son propios pues éstos fueron producto de procesos democráticos que son la forma de su razón, participación y cultura en su país de origen, aspecto que también conlleva a presumir que, cuando una persona se encuentra en una nación extranjera, ésta será ajena a esos procesos y esfera de derechos que no le son conocidos porque no participó en su formación. De esta forma, debe interpretarse que el artículo 36 en comentario garantiza, internacionalmente, que todo individuo sea protegido de las inseguridades que, por lógica, provoca la aplicación de un sistema ajeno y presumiblemente desconocido para un extranjero mediante la presencia de su consulado, para que este intervenga produciendo un efecto culturizador en el interesado.

Es decir, mediante la presencia de la asistencia consular prevista en este fundamento 36 convencional, se pretende que los consulados sean garantes de la Seguridad Jurídica y sirvan de medio entre la perspectiva del legislador que democráticamente articuló el proceso nacional —que le es desconocido al procesado extranjero— y la diversa óptica cultural del individuo sujeto a proceso penal en nación extranjera; y es que, constituye una garantía, tanto en Derecho Internacional como en el Constitucional (considérese al artículo 14 constitucional, párrafo segundo) que a todo individuo se le juzgue mediante la aplicación de un sistema legal previamente establecido democráticamente

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

por los propios ciudadanos mediante sus leyes (incluso existe jurisprudencia del Pleno con esta concepción básica¹⁵⁷) y con participación de los mismos a través de su sistema representativo, porque debe tenerse presente que, en última instancia, la sentencia que se dicte en el país extranjero vinculará al procesado a una ley penal en la cual no participó; aspectos, todos estos, que inciden en la tutela judicial efectiva y en la defensa adecuada, incluso en el sistema de Derechos Humanos Fundamentales cuya garantía legitima la condena; esto es, no se trata de que el Estado que sujeta a proceso penal a persona extranjera sólo le garantice cualquier asistencia consular ni solo su presencia en cualquier etapa, sino que, en todo trámite y

Se hace referencia a la siguiente jurisprudencia del Pleno: Novena Época.— Registro: 612.— Pleno

Jurisprudencia P./J. 102/2009.— Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 2009, página 1069. **“ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. LOS QUE AFECTAN LA EFECTIVIDAD DE LOS PARTICULARES DEBEN SER CREADOS POR LEY O MEDIANTE ACTO DEL PODER EJECUTIVO EN EJERCICIO DE FACULTADES ESPECÍFICAS ATRIBUIDAS CONSTITUCIONALMENTE, SALVO QUE SE TRATE DE ENTES CUYA ACTIVIDAD SÓLO TRASCIENDA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. De la interpretación de los artículos 8o. y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con las tesis 2a./J. 68/97 y P. CLII/97, de rubros: “REGLAMENTOS. LA FACULTAD DE EXPEDIRLOS INCLUYE LA DE CREAR AUTORIDADES Y DETERMINAR SU COMPETENCIA.” y “FACULTAD REGLAMENTARIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO LA EXCEDE AL CREAR UNA AUTORIDAD, SI SE AJUSTA A LA LEY.”; se advierte que, por regla general, las autoridades del Estado que afectan la esfera de los gobernados deben ser creadas a través de una ley con el objeto de evitar la proliferación de entidades creadas caprichosamente por diversa autoridad administrativa instituida legalmente, pues de lo contrario ello justificaría la generación de verdaderas autoridades “de facto”, las cuales, desde luego y en principio tendrían un origen inconstitucional por no gozar de un reconocimiento legislativo, además de que esas prácticas materialmente permitirían que la estructura de la administración pública se modificara con relativa facilidad y con ocasión de perjuicios para la seguridad jurídica de los gobernados. Sin embargo, esa regla puede admitir excepciones, una de las cuales es precisamente cuando el propio Poder Legislativo faculta a la autoridad administrativa para crear, a través de un acto administrativo, a nuevas autoridades; en estos supuestos el acto de creación deberá publicitarse mediante actos administrativos de carácter general (como pueden ser los reglamentos o incluso los acuerdos publicados en los medios de difusión oficial) y a condición de que la actuación del nuevo ente autoritario tenga las facultades específicas que se le determinen en cada caso conforme a las disposiciones legales aplicables. Pero también debe reconocerse que cuando un organismo administrativo dentro de la administración pública centralizada no actúa hacia el exterior y únicamente ejerce funciones internas de asistencia, asesoría, apoyo técnico o coordinación, su creación no tendrá más límites que la determinación del titular de la dependencia de acuerdo con el presupuesto asignado.”** Controversia constitucional /2004. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 22 de enero de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Beatriz J. Jaimes Ramos, Heriberto Pérez Reyes y Emmanuel G. Rosales Guerrero.

procedimiento penal seguido al extranjero debe garantizarse que la ley y todo el procedimiento sean aplicados con un efecto culturizador a través de la asistencia consular, pues no es lo mismo desde la seguridad jurídica, que las leyes penales y sus procedimientos se apliquen directamente al no nacional que lo desconoce, a que ese derecho —desconocido e incierto para el extranjero— se intente aplicar dentro de parámetros de seguridad jurídica, lo que se logra —al menos desde la presunción de la comunidad internacional—, mediante una culturización a través de la asistencia consular, de ahí que la inobservancia de este Derecho Humano Fundamental contenido en sede normativa convencional afecte significativamente la validez de las actuaciones penales que incurren en su preterición, esto, según la jurisprudencia internacional y las doctrinas académicas generalizadas que sirven de base a estas consideraciones.

En definitiva, el núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero es preciso ubicarlo, no sólo en la modalidad de la designación de un perito en Derecho, sino en la efectividad de la defensa.

En esta línea, una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero, ya que es en ese espacio temporal en el que la comprensión de la acusación, la comprensión de los derechos que le asisten al detenido, la comprensión básica del sistema penal al que se enfrenta, la comprensión de los efectos de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto o contratación de un abogado

local a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión. Esta exigencia, por lo demás elemental y obvia, se constituye como un elemento básico de la tutela judicial a fin de preservar todos los derechos de defensa de un extranjero.

El derecho fundamental contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se quedaría en una mera declaración de buenas intenciones, si la asistencia se sucede en un momento procesal en el que los elementos que acabamos de describir ya no resultan relevantes para la suerte del procesado, lo que conllevaría que el funcionario consular se convierta en alguien a quien se le invita por compromiso, pero que no es tenido en cuenta.

En definitiva, la importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros. Es decir, la posibilidad de que un extranjero pueda ser oído públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, depende —de forma absoluta— del presupuesto previo relativo a la asistencia real y efectiva de los miembros de la oficina diplomática de su país¹⁵⁸.

¹⁵⁸ En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones

Precisado lo anterior, en relación al tema de que se trata, es de señalar que según declaraciones de la propia autoridad y que constan en el proceso penal, la detenida fue puesta a disposición de la agente del Ministerio Público de la Federación a las **10:16** horas, del nueve de diciembre de dos mil cinco.

En esa misma fecha pero hasta las **15:05** horas., dicha funcionaria investigadora trató de comunicarse a la embajada de para avisar que se encontraba a disposición de la SIEDO. En ese momento, no se localizó a nadie del personal de la embajada toda vez que de acuerdo a la información obtenida vía telefónica, el horario de atención era de lunes a jueves hasta las **14:15** horas y los viernes hasta las **13:45** horas¹⁵⁹.

realizó su primera declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación a las **3:10** horas, del nueve de diciembre de dos mil cinco¹⁶⁰.

El agente del Ministerio Público de la Federación se comunicó con el Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México a las **12:20** horas, del siguiente día, el diez de diciembre de dos mil cinco¹⁶¹.

Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables. Opinión Consultiva OC-'99, párrafo 124.

¹⁵⁹ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Puesta a disposición de la SIEDO de y l Fojas 188 y 189.

¹⁶⁰ Cuaderno de primera instancia /2006-IV). Tomo I. Declaración de l z. Fojas 282 a 290.

¹⁶¹ Un día antes, a las 3:05 p.m., del 9 de diciembre de 2005, la Agente del Ministerio Público de la Federación trató de comunicarse a la embajada de para avisar que se

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

El Cónsul General de Francia en México visitó a la hoy recurrente, en las dependencias del Ministerio Público de la Federación, a las **15:45** horas, del diez de diciembre de dos mil cinco.

Lo anterior, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidencia por sí sola, la existencia de una violación al derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular de forma inmediata, habida cuenta que, con independencia de que la quejosa ya había sido restringida injustificadamente de su libertad por más de cinco horas, por parte de los agentes aprehensores, una vez que éstos la pusieran a disposición del Ministerio Público de la Federación (10:16 Hrs.), transcurrieron aproximadamente cinco horas más, para que éste avisara de su detención a la representación diplomática (15:05 hrs.) no obstante que el artículo 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, le imponía la comunicación inmediata de ese hecho; sin que exista constancia en autos por la cual pueda derivarse un motivo o impedimento razonable que justifique la demora en esa comunicación.

Además de que en ningún momento se advierte que el Ministerio Público hubiera tratado de lograr esta comunicación a través de todos los medios legales a su alcance, pues sólo se

encontraba a disposición de la SIEDO. En ese momento, no se localizó a nadie del personal de la embajada toda vez que el Ministerio Público había llamado fuera del horario de atención. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada apartado II.4.A y B. Foja 279. Véase el

limitó a hacer una llamada telefónica, la cual realizó minutos antes de tomar la declaración de la detenida, lo cual revela indudablemente que esa pretendida notificación ni siquiera resultaba oportuna, dado que aún de haberse logrado el contacto consular no hubiera tenido ningún efecto útil, pues resulta ilógico suponer que el representante diplomático se hubiera constituido en el lugar que ocupa la Agencia de Investigación en cinco minutos, para que la detenida hubiera contado con una defensa eficaz.


Lo anterior indudablemente hizo imposible la plena satisfacción del derecho de la detenida a una defensa adecuada y ello se traduce en la violación a la garantía prevista por la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Federal, cuyos alcances fueron definidos por esta Sala al resolver el amparo en revisión /2008, en sesión del seis de mayo de dos mil nueve.

En ese orden de ideas, es de concluirse que en aras de cumplir con la garantía de defensa adecuada, en todo trámite de procedimiento penal seguido a un extranjero debe garantizarse que la ley y todo el procedimiento sean aplicados con un efecto culturizador a través de la asistencia consular, pues no es lo mismo desde la seguridad jurídica, que las leyes penales y sus procedimientos se apliquen directamente al no nacional que lo desconoce, a que ese derecho —desconocido e incierto para el extranjero— se intente aplicar dentro de parámetros de seguridad jurídica, lo que se logra —al menos desde la presunción de la comunidad internacional—, mediante una culturización a través de la asistencia consular, de ahí que la inobservancia de este

Derecho Humano Fundamental contenido en sede normativa convencional afecte significativamente la validez de las actuaciones penales que incurren en su omisión.

El derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Finalmente, en sus agravios la quejosa hace valer argumentos relacionados con violaciones a su derecho a que se presuma su inocencia. Con la finalidad de dar respuesta a los mismos es necesario realizar un estudio previo sobre el contenido y alcances de este derecho.



El proceso penal es el mecanismo necesario para obtener la prueba de que un individuo ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular no puede considerarse que se ha cometido delito alguno y tampoco que hay un sujeto culpable que pueda ser sancionado.¹⁶² La presunción de inocencia es uno de los pilares del derecho penal referido al Estado de Derecho.¹⁶³ La Constitución Federal establece este principio en el artículo 20, Apartado B, fracción I, que hablando de los derechos de toda persona imputada prescribe "que se presuma su inocencia mientras no se declare responsabilidad penal mediante sentencia emitida por el juez de la causa".¹⁶⁴ Este

¹⁶² Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal*, (Madrid: Trotta, 1995), p. 549. Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*.

¹⁶³ Magistrado Winfried Hassemer, *Límites del Estado de Derecho para el combate contra la criminalidad organizada*, trabajo presentado en la reunión de la Europäische Rechtsakademie de Tier, traducción de Alfredo Chirino Sánchez, p. 5.

¹⁶⁴ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 20.

derecho fundamental consta de dos significados: como regla de tratamiento del imputado –que excluye o al menos restringe al máximo la limitación de la libertad personal- y como regla de juicio –que impone la carga acusatoria de la prueba al Ministerio Público y la absolución en caso de que no existan elementos de prueba suficientes-.¹⁶⁵

Existe, por tanto, un deber del tribunal de ocuparse de motivar la valoración de la prueba que obliga, en rigor, a confrontarse con ella en una clave de racionalidad explícita, estableciendo, de este modo, un estándar de exigibilidad sobre ella. A fin de establecer que algunos enunciados acerca de los hechos que fueron declarados probados, en realidad no lo están.

El derecho a que se presuma la inocencia de cualquier persona constituye una presunción iuris tantum pues con la actividad probatoria durante el proceso se puede desvirtuar dicha presunción. Ahora bien, para que el proceso “destruya” la presunción de inocencia debe ajustarse a los principios esenciales del mismo y respetarse los derechos que asisten al gobernado. Con la aplicación de ésta presunción se garantiza la protección de otros derechos humanos como son la dignidad humana, la libertad, la honra, la propiedad y que pueden resultar

¹⁶⁵ Luigi Ferrajoli, *Derecho y Razón*, p. 551.

vulnerados por actuaciones irregulares por parte de la autoridad.¹⁶⁶

El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.

Conforme a la regla de trato, nadie puede ser arbitrariamente detenido sin explicar con fundamentos la causa de ello y tampoco puede ser detenido indefinidamente sin que se inicie un proceso en su contra. Asimismo, como se establece en la tesis citada anteriormente, el derecho a la presunción de inocencia trasciende a las situaciones extraprocesales,

¹⁶⁶ A. R. /2007, Segunda Sala de la SCJN, Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, 21 de marzo de 2007.

imponiendo a la autoridad la obligación de tratar al sujeto como “no autor” de la comisión de un hecho de carácter delictivo; en otras palabras, la Constitución prohíbe que se realicen condenas anticipadas. Por otro lado, como regla de juicio, nadie puede ser condenado cuando existan dudas razonables sobre la actividad probatoria del órgano acusador. De la materialización de ambas vertientes del principio, se desprende que la presunción de inocencia produce la obligación a la autoridad de proveer elementos probatorios suficientes que justifiquen la restricción de un derecho. En este sentido, el Tribunal Constitucional Español ha establecido que:

“una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial (“in dubio pro reo”) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos [...] El derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al enjuiciamiento de conducta presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos”.¹⁶⁷

En esta lógica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la presunción de inocencia en su artículo 8.2, el cual establece lo siguiente:

¹⁶⁷ Tribunal Constitucional de España, Sala Primera, Sentencia 1/1982, de primero de abril de 1982 (BOE núm. 95 de 21 de abril de 1982). Disponible para consulta en: <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1.pdf>

8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (...).

La Corte Interamericana ha destacado la importancia del derecho a la presunción de inocencia al señalarlo como un fundamento de las garantías judiciales,¹⁶⁸ según el cual las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se acredite plenamente su culpabilidad.¹⁶⁹

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que "el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa".¹⁷⁰

¹⁶⁸ Corte IDH. Caso *... Vs. Ecuador*. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77; Caso *... Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153; Caso *... y ... Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 145; y Caso *... y ... Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 182.

¹⁶⁹ Corte IDH. Caso *... Fondo*, párr. 77; y Caso *... párr. 153*; y Caso *... y ... párr. 182*.

¹⁷⁰ Caso *F ...*, párr. 154 y Caso *... y ...*, párrs. 182 y 183.

La comprobación de la hipótesis sobre la culpabilidad de una persona debe fundarse en pruebas que satisfagan los requisitos de fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia para considerar que han logrado vencer la presunción de inocencia que asiste al inculpado. La fiabilidad es la condición de los hechos que se encuentra sujeta a la forma en que la prueba fue obtenida. Si las condiciones en que ésta se obtuvo, duda sobre su contenido, la condición de fiabilidad no podrá verse satisfecha. La condición de suficiencia remite a que las pruebas deben bastar para comprobar los elementos que conforman la hipótesis sobre la culpabilidad; sin embargo, esta condición se sustenta en la condición de fiabilidad de la prueba, si ésta carece de fiabilidad no podrán tenerse por cumplido el criterio de suficiencia. El criterio de variación garantiza que se eliminen hipótesis alternativas a la culpabilidad y se supere, con ello, la duda razonable. Este criterio requiere que se aporten diversos elementos que sustenten hipótesis (sin que pueda descartarse la posibilidad de que un solo elemento pueda comprobar la hipótesis de la culpabilidad debido a una fiabilidad abundante y suficiente). Por último, el criterio de relevancia implica que las pruebas deben guardar estrecha relación con los elementos de la hipótesis de culpabilidad que el Ministerio Público tiene que comprobar. Si los elementos que aporte el Ministerio Público no satisfacen estas condiciones no podrá comprobarse la hipótesis de culpabilidad que debe fundamentar la convicción en el juzgador para declarar la responsabilidad en la comisión de un ilícito en contra del procesado

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

El incluir elementos de prueba en un proceso que fueron obtenidos violentando los derechos del imputado supondría violentar la presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio. Ello ya que se estaría intentando desvirtuar los elementos de la presunción con pruebas que no pueden ser consideradas adecuadas puesto que la forma en que éstas fueron obtenidas resta fiabilidad a su alcance probatorio y, por tanto, la protección que reconoce la Constitución a los sujetos de proceso se vería vulnerada. Ahora bien, en relación con los efectos producidos por las violaciones a estos dos derechos deben sumarse los efectos producidos por la violación al derecho a la asistencia consular que como ya se dijo, fue vulnerado en perjuicio de la ahora recurrente.



En relación con el caso de estudio, las violaciones al derecho a la presunción de inocencia tienen que entenderse en conexión con las violaciones a los derechos a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la asistencia consular. Como consta en los autos, la policía incumplió con su obligación de poner a disposición del Ministerio Público de forma inmediata a la quejosa pues una vez realizada la detención se trasladó a la quejosa al rancho " " con el argumento de rescatar y proteger a las víctimas. Sin embargo, si la actuación de la policía se hubiera limitado a esas acciones no se hubiera concretado la violación al derecho en cuestión, pero – como consta en autos- durante ese lapso es que se realizó una transmisión televisiva por la que se difundió públicamente la supuesta detención de la quejosa junto con otro presunto responsable, en el lugar donde al parecer se encontraban las

víctimas de secuestro. Dichos actos produjeron la violación del derecho de la quejosa a ser puesta a disposición inmediatamente ante el Ministerio Público y vuelve inoperante la justificación sobre la demora del traslado que argumentó la policía.

De igual forma, dicha demora en la puesta disposición ante el Agente del Ministerio Público, supone también el que se violentara el derecho de la quejosa a recibir asistencia consular pues, al impedir que se notificara de inmediato al Consulado General de la República en México sobre la detención de una ciudadana ya que de acuerdo a la constancia ministerial asentada a fojas 279 del proceso penal, la llamada que realizó a fin de comunicar la detención de la ciudadana de origen , se registró a las 15:05 horas del día de su detención, esto es, fuera del horario de atención asentado en la respectiva constancia, hecho que indudablemente negó la oportunidad de los funcionarios consulares de oponerse o de denunciar de forma inmediata la realización de dichas prácticas contrarias a derecho por parte de la otrora Agencia Federal de Investigación y vulnerando, así, el contenido del derecho a la asistencia consular.

Las violaciones al derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato puede influir en un proceso judicial cuando la manipulación de los hechos por parte de la policía tiende a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión,

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido; y (v) el hecho de que alguien hubiera identificado al detenido, sin que esta enumeración sea exhaustiva.

En este sentido la Corte Interamericana estableció en el Caso _____ y _____ Vs. México que: *“el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa”*.¹⁷¹

A pesar de que la quejosa hizo valer en sus conceptos de violación que se habían producido violaciones a su derecho a que se presuma su inocencia, el Tribunal Colegiado de Circuito se limitó a señalar en su sentencia que no existía violación alguna ya que *“la presunción de inocencia (se garantiza) frente a tribunales constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública (...). Asimismo, que en la lógica del recurrente, “se debería absolver a todo aquél que sea fotografiado en el momento de la detención”, lo que a juicio del Tribunal Colegiado es “sencillamente absurdo” (...)*.¹⁷²

¹⁷¹ Caso _____ y _____, párr. 184.

¹⁷² Cuaderno de amparo directo 3/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Folios 983 y 983 vuelta.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no comparte estos razonamientos, por lo que procede a declarar la violación del derecho fundamental en estudio, con base en lo siguiente:

Como se señaló, la presunción de inocencia consta de dos vertientes: como regla de tratamiento respecto al individuo y como regla de juicio en el proceso o estándar de prueba. Como regla de tratamiento, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado –sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha– incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito desconoce que la presunción de inocencia determina una configuración compleja en su contenido y que, en los términos desarrollados en esta sentencia, no se ve limitada al actuar de los jueces. Asimismo, el Tribunal Colegiado pretende señalar que frente a la “opinión pública” no es exigible la presunción de inocencia. En este punto resulta fundamental señalar que no es la “opinión pública” o los medios de comunicación a los que se les deben imputar el retraso en la puesta a disposición de la quejosa ante la autoridad ministerial. Sino a los agentes y responsables de la Agencia Federal de Investigación que retuvieron indebidamente a la quejosa por aproximadamente cinco horas con la finalidad de obtener la transmisión a través de un medio de comunicación

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

televisivo, de su supuesta detención, cuyo hecho fue reconocido por la Agencia Federal de Investigación en una conferencia de prensa, meses después.

Así las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en el caso concreto, existe una violación al derecho fundamental de la recurrente a la presunción de inocencia como regla de trato y, como se verá a continuación, también como regla probatoria que disciplina los requisitos que han de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas.

Las violaciones cometidas por parte de la policía investigadora, requieren que se determinen los efectos que éstas tuvieron en los elementos probatorios y su relación con la presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio como estándar probatorio. Para que el actuar de la autoridad constituya una violación a los derechos del imputado que se concrete en la obtención del material probatorio es necesario que su actuar sea indebido, es decir, que se haya realizado contrariando lo establecido por la Constitución y las leyes que de ella emanan, tal y como se ha argumentado que se produjo en el caso de marras.

El material probatorio obtenido de forma indebida provoca su falta de fiabilidad, situación que impacta los derechos de la persona acusada, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho que tiene toda persona a

que, en caso de ser condenada, su condena no tenga como base evidencia de cuestionable fiabilidad, especialmente cuando ésta es imputable a la actuación ilegal de la autoridad. A juicio de esta Primera Sala, la actuación de la Agencia Federal de Investigación fue indebida y arbitraria, y vulneró los derechos de la recurrente al retenerla indebidamente después de su detención, con la finalidad de practicar una diligencia irregular para justificar ante la opinión pública la eficacia de su actuación.

La actuación por parte de la Agencia Federal de Investigación no sólo supuso dilaciones en la puesta a disposición de la detenida ante la autoridad ministerial, sino que también produjo violaciones al derecho de la recurrente a recibir asistencia consular pues la actuación injustificada de la policía supuso que dicha asistencia se retrasara. Las autoridades mexicanas tienen la obligación, en caso de detener a un extranjero, de notificar inmediatamente a las autoridades consulares que corresponden a la nacionalidad del detenido, con la finalidad que éstas puedan brindar la asistencia necesaria para garantizarle una defensa adecuada. Los efectos en la dilación producen que las pruebas cuya obtención se encuentre relacionada con la violación no puedan ser consideradas en el juicio por las razones expuestas anteriormente. Así, las pruebas relacionadas con la violación de los derechos de la recurrente a recibir asistencia consular, a ser puesta a disposición del Ministerio Público sin dilación una vez detenida y al derecho a la presunción de inocencia, deben ser apartadas del proceso y no pueden ser tomadas en cuenta por el juzgador al momento de dictar una nueva sentencia.

Ello debido a que, los elementos que aporte el órgano acusador para probar dicha hipótesis, deben satisfacer, al menos, los criterios de fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia, pues uno de los aspectos fundamentales de la labor del Ministerio Público en el proceso penal es aportar los elementos de prueba suficientes que generen convicción sobre la culpabilidad del procesado. En otras palabras, el Ministerio Público debe comprobar la hipótesis de la culpabilidad de este.

La fiabilidad es la condición de los hechos que se encuentra sujeta a la forma en que la prueba fue obtenida. Si las condiciones en que ésta se obtuvo, existe duda sobre su contenido, la condición de fiabilidad no podrá verse satisfecha. La condición de suficiencia remite a que las pruebas deben bastar para comprobar los elementos que conforman la hipótesis sobre la culpabilidad; sin embargo, esta condición se sustenta en la condición de fiabilidad de la prueba, si ésta carece de fiabilidad no podrán tenerse por cumplido el criterio de suficiencia. El criterio de variación garantiza que se eliminen hipótesis alternativas a la culpabilidad y se supere, con ello, la duda razonable. Este criterio requiere que se aporten diversos elementos que sustenten la hipótesis (sin que pueda descartarse la posibilidad de que un solo elemento pueda comprobar la hipótesis de la culpabilidad debido a una fiabilidad abundante y suficiente). Por último, el criterio de relevancia implica que las pruebas deben guardar estrecha relación con los elementos de la hipótesis de culpabilidad que el Ministerio Público tiene que comprobar. Si los elementos que

aporte el Ministerio Público no satisfacen estas condiciones no podrá comprobarse la hipótesis de culpabilidad que debe fundamentar la convicción en el juzgador para declarar la responsabilidad en la comisión de un ilícito en contra del procesado.

En ese sentido, es necesario que esta Primera Sala se pronuncie acerca de la afirmación hecha por el Tribunal Colegiado en su sentencia respecto a la consideración sobre la que sustenta la debida integración de la prueba indiciaria para acreditar la responsabilidad de

, pues tiene que ver directamente con la satisfacción de los anteriores criterios.

Así, el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que, conforme a la naturaleza de los hechos y el enlace lógico que exista entre la verdad conocida y la que se busca, habrán de apreciar los indicios que se presenten hasta considerarlos como prueba plena. Para que este tipo de prueba pueda desvirtuar la presunción de inocencia debe privar la coherencia y rechazar la irrazonabilidad, la arbitrariedad y la incoherencia pues constituyen los límites de la admisibilidad de la presunción como prueba.¹⁷³ Contrario a lo apreciado por el

¹⁷³ [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 1213. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. EL ARTÍCULO 286 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho subjetivo público consistente en que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado; garantía que respeta el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, al disponer que los jueces y tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena.

Tribunal Colegiado, la naturaleza de los hechos del caso hace imposible considerar cualquier indicio como una prueba circunstancial válida. Ello debido a que los actos violatorios de los derechos de la recurrente realizados por los elementos de la Agencia Federal de Investigación, consistentes en el montaje para la televisión, rompieron con el enlace natural entre la verdad conocida y la que se busca.¹⁷⁴ Así, los indicios que pudieren orientar al juzgador surgen de hechos cuya fiabilidad es altamente cuestionada y por tanto no pueden constituir un elemento probatorio que tienda a señalar la culpabilidad de la recurrente. En ese sentido, la valoración sin fundamentos formulada por el Tribunal Colegiado respecto a la constitución de la prueba circunstancial constituye un error con base en las violaciones a los derechos de la recurrente.

Lo anterior, toda vez que el juzgador, al valorar la prueba indiciaria, está obligado a exponer los motivos y fundamentos legales en los que apoye el razonamiento lógico que lo llevó a la convicción sobre la existencia de otros hechos o datos desconocidos en el proceso. Además, debe primar la racionalidad y coherencia del proceso mental asumido en cada caso por el órgano jurisdiccional, y rechazar por tanto la irrazonabilidad, la arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, que en todo caso constituyen un límite de la admisibilidad de la presunción como prueba. Sin que la conclusión anterior pueda ser desvirtuada por el hecho de que la norma impugnada no dispone expresamente que la prueba circunstancial sólo procede en aquellos casos en los que no se tiene prueba directa, pues ese es el presupuesto lógico y necesario de su existencia y utilidad.

¹⁷⁴ [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 1212. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. EL ARTÍCULO 286 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho subjetivo público consistente en el debido proceso legal; garantía que respeta el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, al disponer que los jueces y tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena. Lo anterior, toda vez que constituye un medio de prueba que no impide al procesado ejercer su derecho a la defensa y contra-argumentación; además, el citado precepto establece cuáles son las reglas a respetar para la integración y valoración de esta prueba, en particular, exige que se encuentren probados los hechos de los cuales se derivan presunciones y que exista un enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, en la inteligencia de que el enlace entre el hecho base y el hecho consecuencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Sin que la conclusión anterior pueda ser desvirtuada por el hecho de que la norma impugnada no dispone expresamente que la prueba circunstancial sólo procede en aquellos casos en los que no se tiene prueba directa, pues ese es el presupuesto lógico y necesario de su existencia y utilidad, y en el supuesto de que ésta fuera administrada con pruebas directas, sólo reforzarían la conclusión que el juzgador pudo obtener de manera inmediata por otros medios.

SEXTO.- La demora en la puesta a disposición de la detenida ante el Ministerio Público, genera la invalidez de todo el periodo no justificado por la policía investigadora; en tal virtud, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que no deben ser tomados en cuenta aquellos elementos que puedan utilizarse como prueba, como resultado de esa demora o los elementos derivados de éstos. Esta conclusión se encuentra respaldada por las violaciones a los derechos de asistencia consular y a la presunción de inocencia.

En ese sentido, uno de esos elementos lo constituye la **identificación que las víctimas**

y hacen de la quejosa en las ampliaciones de sus declaraciones iniciales, en donde expresamente afirman que reconocieron a la quejosa como consecuencia de verla en los noticieros de la televisión y lo mismo acontece respecto del testigo

Debe precisarse, que esta Sala no considera que cualquier identificación derivada de una transmisión por medios de comunicación sea inválida por provenir de dicha transmisión; sino que en el caso concreto, esta transmisión, al provenir de una violación procesal constitucional grave, como es la demora injustificada en la puesta a disposición al Ministerio Público, genera la invalidez del reconocimiento que las propias víctimas realizan de la quejosa a partir del material obtenido con violación a un derecho fundamental.

De igual forma, no deben tomarse en cuenta, los elementos que adiciona a sus anteriores declaraciones, en la ampliación de declaración de quince de febrero de dos mil seis, y que son los siguientes:

1.- El agregado relativo a que desde la primera casa de seguridad en donde estuvieron privados de su libertad, su hijo y ella escucharon la voz de una persona extranjera con acento muy peculiar, por lo que una vez que ha analizado esa voz, con la que ha escuchado en los medios de comunicación (televisión) de la persona que se identifica con el nombre de

sin temor a equivocarse reconoce que es la misma voz que escuchó en varias ocasiones en las dos casas de seguridad en que estuvieron en cautiverio, debido a que el sitio donde los secuestradores la pusieron estaba muy pegado a la que daba al cuarto en donde siempre se encontraban los sujetos que los cuidaban y al momento de entrar y abrir la puerta escuchaba la voz de ella claramente, percibiendo la voz y el tono de una extranjera y misma voz que se oía que estaba bromeando con los demás cuidadores; esto sucedió en la primera casa de seguridad en la que estuvieron privados de su libertad.

2.- La manifestación de la señora, que un comerciante que vende verduras sobre la banqueta cerca de su domicilio le preguntó que si la habían secuestrado y al decirle que sí, le comentó que la mujer que había salido en la televisión en varias ocasiones la había visto por ahí, sobre todo cuando la de la voz se encontraba de compras por ese lugar, y observaba que esta mujer la seguía y estaba pendiente de

donde ella iba y que incluso la mujer se metía a una farmacia del rumbo y a través de los aparadores la vigilaba.

3.- La manifestación, una vez que el Ministerio Público de la Federación le mostró el audio en donde se aprecia la voz de una persona del sexo femenino de origen , que fue reproducido a la declarante, quien una vez que lo escuchó con detenimiento, manifestó: “que una vez que lo ha escuchado con detenimiento y **sin temor a equivocarme** reconozco la voz de quien dijo llamarse , como la voz de la misma mujer que escuchó en las dos casas de seguridad en que estuvo privada de su libertad”.

4.- La precisión acerca de que derivado de las llamadas efectuadas y difundidas por los medios masivos de comunicación es decir la televisión, de quien refiere ser , al respecto manifestó, sin temor a equivocarse, reconocer su voz como la voz de la misma mujer que escuchó en el interior de las dos casas de seguridad en las que estuvo privada de su libertad.

5.- Igualmente, una vez que se dio fe de tener a la vista dos fotografías digitalizadas a color marcadas con los números 1 uno y 2 dos, en donde aparece la quejosa, la reconoció, *sin temor a equivocarse* como la misma que le fue mostrada a través de la cámara de Hessel en las instalaciones de la SIEDO, y ser la misma mujer que estuvo y escuchó en las dos casas de seguridad.

**Dé la ampliación de declaración de
realizada por sistema de video conferencia de
siete de junio de dos mil seis, no debe tomarse en cuenta lo
siguiente:**

1.- Que a la recuerda
en la segunda casa de seguridad, ya que en una ocasión les llevó
comida y pudo verla, que fue en un momento en que no estaba
siendo vigilada, por lo que pudo percatarse de la presencia de
una mujer que portaba un pasamontañas y que tenía el pelo

2.- Que "...escuchó a una mujer en las dos casas de
seguridad pues saludaba a las víctimas y a los secuestradores,
cuya complexión física recuerda...".

**De los elementos que adiciona en relación a su anterior
declaración en la ampliación de la declaración del menor
rendida ante el Ministerio
Público el catorce de febrero de dos mil seis, no debe
tomarse en cuenta lo siguiente:**

1.- En cuanto a la identificación de la voz de la persona que
menciona llamarse , "como
la misma voz de la persona que me sacó sangre de mi brazo, lo
anterior lo he comprobado, ya que al escuchar esta voz en los
noticieros que pasan en la televisión, la reconozco y es la misma
voz como lo dije de la persona que me sacó sangre".

2.- En relación a dos fotografías que se les mostraron, la manifestación: ... "Se observa a una persona del sexo femenino que porta una blusa de color oscuro, misma persona que se observa en recuadros de ambos perfiles y una vez que la observó con detenimiento manifestó: que reconozco a esta persona que ahora sé responde al nombre de

como la misma que nos fue mostrada a través de un cuarto donde la vi detrás de un vidrio, en las oficinas en donde declaré por primera vez y esta declaración fue posterior a nuestra liberación".

De la misma forma, de la ampliación de declaración de , realizada por sistema de video conferencia de siete de junio de dos mil seis, no debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1.- La aclaración que realizó en la primera declaración que le sacó la sangre (realmente dijo que fue persona a quien identificó como jefe), pero que él sólo dijo fue el que dio la orden, entonces la señorita " " vio la mano, le dijo "aprieta el puño", entonces le sonó raro porque el declarante no conocía el acento francés hasta ese momento, luego le dijo a su mamá que oyó a una persona que tenía un acento raro, su mamá le dijo que tratara de describírselo pero no le entendió bien.

2.- A preguntas del defensor particular de ; y , respondió varias en relación con su cautiverio, y en relación a la

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

identificación de la voz de esta última persona, al contestar las preguntas número 39 y 40, señaló: "...Que diga el testigo si recuerda dónde se encontraba cuando escuchó la voz de la persona del sexo femenino con acento extranjero en los noticieros de la televisión. RESPUESTA.- En mi casa, el nueve de diciembre (sic). 40.- Que diga el testigo qué recuerda de ese noticiero del nueve de diciembre.- RESPUESTA.- Que primero reconocí a otra vez y a la y a la señorita también, que habló al noticiero, nada más, y escuchó que la persona femenina de acento extranjero dijo que sólo le estaba dando chance de quedarse en ese rancho...".

No debe tomarse en consideración la declaración rendida por el diez de febrero de dos mil seis:

1.- Manifestó que conocía a porque era clienta de su puesto de verduras y que cuando ésta le platicó que había sido secuestrada, él recordó que había visto en la televisión a los secuestradores y que le parecía conocida la mujer que presentaban como responsable del secuestro porque esa persona había estado siguiendo a la señora , aclarando que la recordaba como una persona y Posteriormente reconoció a por las fotografías que le mostró el Ministerio Público.

Tampoco es de tomarse en cuenta la segunda comparecencia ministerial del testigo
, realizada el uno de marzo de dos mil seis:

1.- En esta reconoció a través de la Cámara de Gesell a
..... como la persona que
seguía a, así mismo manifestó que
reconocía su voz y su aspecto físico porque llegó a su negocio a
comprar frutas y verduras.

Finalmente, en relación a la violación al derecho de la quejosa de no haber contado con la debida asistencia consular, por razones imputables al ministerio público al no haber notificado al consulado desde el momento de que fue puesta a su disposición, lo que no debe tomarse en cuenta es:

1.- La totalidad de la primera declaración ministerial re.....
por, con fecha nueve de
diciembre de dos mil cinco.

SÉPTIMO.- No obstante que la interpretación constitucional plasmada en los párrafos precedentes, trae como consecuencia que se revoque la sentencia recurrida, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de resguardar el principio de congruencia consagrado por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 83, fracción V, de la Ley de Amparo, se encuentra obligada a pronunciarse sobre

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

una cuestión de legalidad que se encuentra estrechamente vinculada al referido análisis de constitucionalidad, habida cuenta que las consecuencias de la violación al derecho a la presunción de inocencia se materializan directamente en las pruebas de cargo con las que tribunales acreditaron la responsabilidad de la recurrente por la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, como lo es la valoración que realizó la autoridad responsable de los testimonios rendidos por las víctimas del delito de secuestro y el parte informativo de la otrora Agencia Federal de Investigación y que fue convalidada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, porque dicho estudio no puede desvincularse de aludido tema de constitucionalidad.¹⁷⁵

En efecto, con independencia de que las violaciones graves de derechos fundamentales cometidas en perjuicio de la autoridad responsable de garantías producen la invalidez de las probanzas

¹⁷⁵ Novena Época; Registro: 163274; Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Diciembre de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 2010; Página: 673; **"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INTERPRETA LA NORMA CONSIDERADA COMO INCONSTITUCIONAL DE MANERA DISTINTA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y TAL INTERPRETACIÓN TRASCIENDE AL PROBLEMA DE LEGALIDAD, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ESTE ÚLTIMO PARA RESGUARDAR EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA."** Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito podrán recurrirse en revisión cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes o reglamentos, federales o locales, tratados internacionales, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución, debiendo limitarse la materia del recurso a las cuestiones propiamente constitucionales. Ahora bien, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de sus atribuciones, interpreta la norma considerada como inconstitucional de manera distinta a como lo hizo el Tribunal Colegiado de Circuito y, como consecuencia de ello, modifica o revoca la sentencia recurrida en ese aspecto y ello trasciende al problema de legalidad, tales circunstancias la obligan a pronunciarse sobre dicha cuestión de legalidad aunque ya lo haya hecho el Tribunal Colegiado de Circuito, atendiendo al justo alcance de la norma controvertida, ya que de subsistir las consideraciones de la sentencia recurrida que decidieron el problema de legalidad a partir de una premisa errónea, se atentaría contra el principio de congruencia que impera en las ejecutorias de amparo en términos de los artículos 77, fracciones II y III, y 91, fracciones I y III, de la Ley citada, pues en un mismo asunto estarían sustentándose determinaciones contradictorias sobre la interpretación de un mismo precepto legal y su aplicación. Lo anterior no implica desconocer el carácter de cosa juzgada que en materia de legalidad tienen las mencionadas sentencias, ya que tal principio no opera cuando el examen de constitucionalidad de la ley dependa de la interpretación de la norma controvertida, por tratarse de un tema propiamente constitucional que no puede desvincularse del de legalidad.

que han quedado reseñadas en el considerando sexto de esta sentencia, en las partes que quedaron precisadas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que tampoco es posible asignarle valor convictivo a los testimonios rendidos por _____ y

_____, en las partes que pudieran subsistir, porque los mismos no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, en atención a lo siguiente:

Ello, porque como ha quedado precisado en párrafos precedentes, las modificaciones que fueron realizando dichos testigos a sus respectivas declaraciones, producen duda respecto de la espontaneidad del reconocimiento que hicieron de

_____, en cuanto a su participación en los hechos que se le atribuyen y permiten estimar que el mismo fue inducido a partir de su presentación ante los medios de comunicación, ya que ambas víctimas parten de que esa referencia fue derivada de dicha circunstancia, sumado a que en la primera declaración nunca mencionaron su intervención como cómplice, inclusive, conforme se van actualizando las diversas comparecencias ante las autoridades ministeriales, así como al responder a las preguntas formuladas tanto por el defensor particular de la indiciada como de la propia autoridad ministerial, mencionan circunstancias novedosas que hacen dudar de su credibilidad y otras relevantes como el señalamiento que hace

_____ en cuanto a que logró verla en una ocasión en que se encontraban descuidados, que provocan que no sea posible convalidar la valoración de esas pruebas y por ende, que

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

menos puedan adquirir efectos indiciarios respecto de la identidad de la hoy quejosa como uno de sus secuestradores.

Lo anterior se deriva del comparativo de sus diversas declaraciones realizadas ante la autoridad ministerial, como se verá a continuación:

Primera declaración de 9/Dic/2005	Segunda Declaración. 8/Feb/2006	Tercera Declaración. 15/Feb/2006	Cuarta Declaración. 7/Jun/2006	Contradicciones
<p>Es privada de la libertad el día cincuenta de octubre de dos mil cinco.</p> <p>al momento de llegar a la primera casa, la bajaron de la camioneta, tenía una cobija cubriéndola y entre dos sujetos la guiaron hasta el interior de la casa.</p> <p>En la primera casa donde los tenían privados de la libertad estuvieron aproximadamente veinte días.</p> <p>Que a ella y a</p>	<p>Es al momento de reconocer la casa de seguridad de</p> <p>(segunda casa de seguridad), cuando declara que su hijo le comentó que cuando le iban a sacar sangre un hombre lo saca del cuarto, pero que una mujer con acento raro porque no podía decir la palabra aprieta, con manos blancas y muy bonitas, es quien llevó a cabo dicha acción.</p>	<p>Que al estar en cautiverio en las dos casas de seguridad, su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz reconocieron en los noticieros como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad.</p>	<p>Que estuvo en cautiverio cincuenta y dos días y que a la segunda casa de seguridad, ya que en una ocasión les llevó comida y pudo verla, por lo que pudo percatarse de la presencia de una mujer que portaba un pasamontaña s y que tenía pelo</p> <p>Que al momento de estar en la cámara Gessel estaba acompañada</p>	<p>En su primera declaración no reconoce a como secuestradora.</p> <p>En la segunda declaración manifiesta que su hijo le contó que le sacó sangre del brazo. (Esto al parecer aconteció la primera casa de seguridad).</p> <p>En la tercera declaración señala que ella y su hijo escucharon la voz de en las dos casas de seguridad, (no obstante que en su</p>

<p>su hijo los metieron en un coche y fue como llegaron a la segunda casa de seguridad, no menciona a nadie más que iba secuestrado.</p>			<p>de</p> <p>y</p> <p>(su hijo refiere haber estado solo en compañía de elementos de la A.F.I.)</p>	<p>segunda declaración mencionara que su hijo es quien le dice que escuchó a una mujer de acento raro).</p> <p>En las demás declaraciones manifiesta que reconoce a</p> <p>por su acento.</p> <p>Que reconoce a</p> <p>porque la vio en la segunda casa de seguridad y del pasamontañas que traía puesto se le salía un pelo rubio.</p>
--	--	--	---	---

Primera declaración del menor	Segunda Declaración.	Tercera Declaración.	Ampliación de Declaración.	Contradicciones
9/Dic/2005	14/Feb/2006	7/Jun/2006	7/Jun/2006	
<p>Es privado de la libertad el día diecinueve de octubre de dos mil cinco.</p> <p>Así mismo, declaró lo siguiente: "...es el caso que después llega, saca a mi mamá de la habitación, me</p>	<p>Que el día que le sacaron sangre del brazo izquierdo se percató de que la mano que sintió era delicada, suave y de piel blanca.</p> <p>Que la mujer que lo había inyectado,</p>	<p>Que fue quien dio la orden de sacarle sangre y que fue quien le dijo que apretara el puño, ya que tenía una voz cuyo acento no identificaba en ese entonces,</p>	<p>Que cuando tuvo a la vista en la cámara Gessel a la persona del sexo femenino estaba acompañado por elementos de la A.F.I.</p> <p>Que él se encontraba en su casa el nueve de diciembre cuando escuchó la voz de la</p>	<p>En su primera declaración reconoce a</p> <p>como su secuestradora, sino que esto lo hizo hasta su segunda declaración.</p> <p>En su primera declaración menciona que una persona llamada le</p>

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

<p>quedo yo solo, después me saca sangre de la vena de mi brazo izquierdo, me dijo que era para hacerme unos análisis, ya que ellos tenían un doctor en la casa, me pone un algodón en el oído izquierdo, después me pone un líquido y una toallita, me dijo que es porque mi papá quiere que le mandemos algo (sic)..."</p>	<p>tenía un tono de extranjera, con acento raro y que identificó a</p> <p>por su voz en los noticieros que pasan en televisión.</p>	<p>pues desconocía el acento</p>	<p>persona del sexo femenino con acento extranjero en los noticieros de televisión y que lo que recuerda que escuchó fue que la persona femenina de acento extranjero dijo que sólo le estaba dando chance de quedarse en ese</p>	<p>saca sangre es hasta su segunda declaración donde señala que era una persona del sexo femenino con acento extraño quien lo realizó y con manos blancas y suaves.</p> <p>En su tercera declaración señala que dio la orden de que le sacaran sangre y que esto lo hizo</p> <p>Que el día nueve de diciembre él ya estaba en su casa y fue al escuchar a</p> <p>en las noticias cuando la reconoce como la persona que le sacó la sangre.</p>
--	---	----------------------------------	---	--

En efecto, de la lectura de la primera declaración que ambos rindieron el nueve de diciembre de dos mil cinco, ante el Ministerio Público, ninguno de ellos menciona a la quejosa, como una de las personas que participaron en su secuestro o que se encontrara en la casa de seguridad en que los mantuvieron privados de su libertad, tan es así, que cuando se practicó la diligencia de reconocimiento a través de la cámara gesell, la primera señaló que era la primera vez que la veía y que su voz no coincidía con la de sus secuestradores, además de precisar que los agentes de la

entonces Agencia Federal de Investigación fueron quienes le informaron que _____ había participado en el secuestro; y el **segundo de ellos no la reconoció, ni físicamente ni por su voz.**

El ocho de febrero de dos mil seis, al llevarse a cabo una diligencia de reconocimiento de inmueble,

en una segunda declaración expresó hechos que según dijo, le fueron narrados por su hijo

—que cuando le sacaron sangre de un brazo, esto lo hizo una mujer de acento raro y que sus manos eran blancas y bonitas-; de la referida declaración únicamente se puede evidenciar que se limitó a narrar lo que su hijo le platicó; es decir, se trata de hechos que a ella no le constan de manera personal y directa y por lo tanto no cumplen con el requisito que exige la fracción III del artículo 289 del código procesal penal federal, porque evidentemente lo que ahí expresó fue por referencia de un tercero.

En tanto que _____, en su segunda declaración producida el día catorce de febrero de dos mil seis, modifica sustancialmente su primigenia deposición, en la que había mencionado que uno de sus secuestradores de nombre _____ (a quien le atribuyó el carácter de jefe) le sacó sangre del brazo izquierdo, para introducir nuevos elementos: ***que cuando le sacaron sangre del brazo sintió una mano delicada, suave y de piel blanca; que escuchó a la mujer que lo había inyectado que su tono era de extranjera porque tenía acento raro.***

Tal deposición resulta a todas luces inverosímil, pues no resulta lógico que en un principio haya manifestado con detalle la forma en que le fue sustraída la sangre y que inclusive haya proporcionado el nombre de la persona que le sacó ese vital líquido, a quien identificó como [redacted] y que incluso señala como jefe, narrando además una serie de actos que realizó éste al momento de que practicó esa extracción: **"...es el caso que después llega [redacted], saca a mi mamá de la habitación, me quedo yo solo, después [redacted] me saca sangre de la vena de mi brazo izquierdo, me dijo que era para hacerme unos análisis, ya que ellos tenían un doctor en la casa, me pone un algodón en el oído izquierdo, después me pone un líquido y una toallita, me dijo que es porque mi papá quiere que le mandemos algo tuyo (sic)..."** (fojas 240 y 241 del tomo); para describir únicamente las manos de una persona del género femenino quien supuestamente fue quien le sacó sangre.

Las circunstancias de un evento traumático, pueden hacer que la persona que lo sufrió, llegue a omitir detalles importantes al momento de describir el evento, para luego ir recordándolos conforme transcurre el paso del tiempo; pero de ninguna manera resulta lógico y creíble que en un principio hubiera narrado casi con exactitud los detalles relacionados con la extracción sanguínea -sobre todo si se toma en cuenta que se trata de un menor de edad-; para luego referir hechos aislados relacionados con este evento, máxime que de lo expuesto en su primera declaración, se advierte que la persona que según dijo le sacó sangre, tardó algunos minutos en hacerlo, pues ello se

evidencia de la propia descripción que hizo el testigo de los actos que realizó cuando hizo esto y menos resulta creíble que si en un principio dijo que " " habló con él (le comentó que su papá quería que le enviaran algo), luego afirmara que escuchó a la mujer que lo había inyectado de quien además agregó que percibió un acento raro.

Además es de señalar que **es hasta la tercera declaración de** (quince de febrero de dos mil seis) **que ella señala haber estado en dos casas de seguridad,** cuestión que no mencionó en sus anteriores declaraciones, mientras que su hijo desde la primera declaración precisa haber estado en dos lugares distintos; y no obstante que tanto ella como su hijo en su primera declaración no identificaron a

ni por su aspecto físico ni por su voz en este acto, **la testigo afirma que tanto su hijo como ella, escucharon en las dos casas de seguridad a una persona extranjera cuya voz reconocieron en los noticiarios y es hasta su cuarta declaración producida el siete de junio de ese mismo año, en que señala que fue precisamente en la segunda casa de seguridad el lugar donde ubica a**

porque les llevó comida y pudo verla, señalando que traía un pasamontañas y que le vio un mechón de cabello

Mientras tanto, **en su tercera declaración** producida también el siete de junio, **precisa que la orden de sacarle sangre la dio y que fue quien le indicó que apretara el puño.**

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

Lo antes relatado pone de manifiesto una serie de inconsistencias en las declaraciones tanto de

como de , pues no obstante que señalaron haber sido secuestrados el mismo día por ser madre e hijo, ambos precisan hechos diversos relacionados con este evento, los cuales van adecuando a sus declaraciones conforme las van produciendo; esto es, que se trató de dos casas de seguridad, que reconocieron a

y que ésta participó en la extracción de sangre del menor.

Pero además denota diversas contradicciones en sus propios dichos, por ejemplo ambos desde un principio no conocieron a ni por

su aspecto físico ni por su voz, luego

introduce que ella le sacó sangre del brazo, afirmación que como se precisó con anterioridad, varía de su primera declaración; menciona que la escuchó en las dos casas de seguridad y luego precisa que esto fue hasta la segunda e introduce un elemento nuevo, que la reconoció porque le vio un mechón de cabello rubio y finalmente; ambos coinciden en señalar que reconocieron su voz hasta que la escucharon en televisión.

Es de importancia relevante resaltar, que cuando produce su primera declaración y le es puesta a la vista en la cámara de Gesell a la hoy quejosa, en ningún momento la reconoce; siendo que es hasta su segunda declaración donde lo hace, pero la propia testigo admite que este reconocimiento lo realizó conjuntamente con los otros testigos

y

; esto es, no se practicó esta diligencia en forma individual, sino conjunta con todos los testigos y esta irregularidad hace suponer fundadamente, que el reconocimiento de que se trata, pudo haber estado influenciado por el señalamiento de los otros participantes de la diligencia.

Todo lo anterior denota con meridiana claridad, que tanto
como su hijo

, realizaron en diversas ocasiones una variación injustificada de sus respectivas declaraciones, de las que inclusive se desprenden las contradicciones que quedaron precisadas, y por ende, sus testimonios resultan ineficaces para generar convicción respecto de los hechos sobre los que declararon, motivo por el cual no reúnen los requisitos que exige el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales para que pueda otorgárseles valor probatorio.



Y si bien es cierto, el testigo
, participa en la diligencia de reconocimiento, es de señalar que en ningún momento hace señalamiento directo a

l, puesto que su declaración tuvo como única finalidad manifestar que fue víctima de un secuestro pero que fue liberado de inmediato con el objeto de reunir dinero para pagar el recate de sus familiares

y

, por lo que este testimonio no tiene trascendencia para los hechos que se atribuyen en forma particular a la ahora quejosa.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

Finalmente, cabe destacar en relación al testimonio rendido por [redacted], que si bien éste, desde su primera declaración menciona que durante su cautiverio advirtió la presencia de una mujer de acento extranjero, al parecer de origen [redacted], este señalamiento por sí sólo resulta insuficiente para producir una sentencia condenatoria, en principio, porque se trata de un dicho aislado que no se encuentra corroborado con algún otro elemento de convicción que lo haga verosímil.

Lo anterior es así, si se toma en cuenta que en el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y cuando se desahoga la declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras de los testigos único y singular, las cuales difieren entre sí en cuanto a su significado, vinculado no sólo con el número de deponentes o personas que declaran, sino también con el hecho de estar o no corroborada la testimonial con otro tipo de medio probatorio.

Pues mientras que la figura del testigo "único" se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta con el dicho de la única persona que lo presencié o deponente individual habido desde el punto de vista cuantitativo, no obstante, su dicho, sí puede estar corroborado con otros medios de prueba (documentos, periciales, indicios, etcétera). En cambio, en el caso del testigo "singular", independientemente de que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento sólo con la declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra apoyada por algún otro medio, por eso su valor convictivo se reduce no sólo por el aspecto cuantitativo del declarante

individual, sino también por la deficiencia cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas.

Así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, además del citado aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado o corroborado con medios convictivos de otra índole, como periciales o indicios en general, el de carácter "singular" se encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte; de ahí la "singularidad" y reducido valor convictivo potencial.

Aunado a lo anterior, es de señalar que dicho testimonio genera dudas en cuanto a su credibilidad, si se toma en cuenta que dicho testigo en su carácter de víctima del secuestro, incurrió en diversas inconsistencias y contradicciones en declaraciones que hacen dudar de la fiabilidad de los hechos respecto de los que depone.



Primera declaración de 9/Dic/2005	Segunda declaración 30/DIC/2005	Ampliación de declaración 30/May/2006	Contradicciones
Es privado de la libertad el 4 de octubre de dos mil cinco. Que tres personas del sexo masculino lo secuestraron en el negocio de su padre. Que la persona que era el líder, a quien pudo	Reconoce el domicilio ubicado en avenida , colonia , delegación , en donde lo tenían, reconociendo la casa sólo por las paredes en donde dice que marcó con un lápiz al sacarle punta y que aún se encontraba esa	Que después que fue sacado de los billares en el transcurso del camino (una hora o cuarenta minutos) escuchó por primera vez la voz de la mujer que arrastraba la letra " " y fue ella quien le	En su primera declaración menciona únicamente que fueron tres personas del sexo masculino quienes lo secuestraron, en la ampliación de declaración menciona a una persona del sexo femenino , que también iba a bordo de la camioneta en que lo

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

<p>verle la cara, representaba una edad de años, tez usaba oscuros, complexión estatura aproximada de</p> <p>cabello usaba gorra y su voz era típica de la región metropolitana, que en el trayecto, el líder, le preguntó si traía teléfono celular, por lo que le contestó que sí, y se lo pidió, se lo entregó y posteriormente le pidió número de teléfonos donde pudiera localizar a su padre.</p> <p>lo llevaron a una casa y lo dejaron en un cuarto, en donde le habían ordenado que cada vez que fuese a ingresar alguna persona tenía que cubrirse con una cobija, por lo que en una ocasión escuchó que tocaron la puerta y se cubrió con la cobija de color roja, y se colocó boca abajo. <u>escuchó que una persona del sexo masculino le dijo que se levantara pero tapado y escuchó la voz de una mujer de aproximadamente años de edad, que hablaba con acento al parecer de origen ya que arrastraba la letra "r", esa mujer le dijo que le</u></p>	<p>marca.</p>	<p>quitó su celular.</p> <p>Que escuchó hablar a la persona de origen extranjero en dos ocasiones.</p>	<p>secuestraron.</p> <p>Es hasta la ampliación de declaración que menciona que la persona del sexo femenino es quien le quita su celular, cuando en la primera declaración hace mención que esto lo hizo una persona del sexo masculino.</p> <p>En contraste con las declaraciones de</p> <p>y</p> <p>no coincide en el primer momento en que escucha por primera vez a éstos en la primera casa de seguridad.</p>
--	---------------	--	--

<p>dejaba comida, que eran unos sándwich, y le dijo que no se hiciera el héroe, después de eso, una persona del sexo masculino le dijo que se quitara la cobija y lo puso de frente a la mujer extranjera que le había estado hablando y vio que ésta traía un pasamontañas y unos lentes oscuros, observó que su cuerpo era de mujer, por sus caderas, era muy delgada y vio que su cabello era largo, de color teñido, al parecer posterior a esto el hombre comenzó a ponerle una venda alrededor de su cabeza, cubriéndole sus ojos.</p>			
--	--	--	--

En efecto, en su primera declaración narró que fue secuestrado por tres personas del sexo masculino en su l

de trabajo (billar) mencionando que dos de ellas traían pasamontañas y el individuo que señaló como líder no, a quien describió como una persona de aproximadamente


años de edad, de un y centímetros de estatura y con acento propio de la región metropolitana, este dato resulta relevante porque su exactitud provoca sospecha de aleccionamiento, dado que coincide con la descripción física que se estableció en la subdirección de identificación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde se señala que el inculpado tiene

años de edad, mide centímetros de



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

estatura y es originario del Distrito Federal; además de que dicho testigo igualmente señala con precisión el vehículo en donde fue trasladado al lugar de su cautiverio, el cual describe como una camioneta marca *;* y que ya estando en la casa de seguridad / donde lo tuvieron retenido fue donde escuchó por primera vez la voz de *;* a la cual pudo ver físicamente en la ocasión en que le quitaron la cobija roja con que se mantenía cubierto.



Luego entonces, no resulta lógico ni creíble que dos de los secuestradores portaran pasamontañas y precisamente la persona que él señala como el líder no lo hiciera, provocando con ello su fácil identificación, además de que tampoco resulta verosímil que no obstante lo traumático que pudiera resultar un evento como el que él describe: *es amenazado con un arma de fuego tipo y además obligado con palabras altisonantes a abandonar su negocio para ser privado de su libertad;* pueda advertir datos tan relevantes como la edad exacta, estatura casi con exactitud y acento de su secuestrador, con la precisión que lo hizo, así como describir con exactitud (tipo, color y marca) de la camioneta en la que fue trasladado al lugar de su cautiverio.

De igual forma se advierte, que tanto su primera declaración (nueve de diciembre de dos mil cinco) y su ampliación de declaración (treinta de mayo de dos mil seis) revelan inconsistencias en cuanto a los hechos de su secuestro y la identificación de *;* como una de las personas que participó en el mismo, pues como ya se

indicó en párrafos precedentes, sostuvo que fueron tres personas del género masculino quienes lo privaron de su libertad y lo trasladaron a la casa de seguridad donde permaneció por espacio de quince días, en cuyo lugar fue donde escuchó por primera vez la voz de un mujer con acento (en este aspecto es relevante destacar que

también determina con precisión del solo sonido de la voz de

que ésta es de aproximadamente años) y que posteriormente logró verla y ella estaba cubierta con un pasamontañas, ya que al efecto precisó: *“...escucho que una persona del sexo masculino me dijo levántate pero tapado y escuché la voz de una mujer de aproximadamente años de edad, hablaba con acento extranjero, al parecer de origen ya que arrastraba la letra “ ” al hablar esa*

mujer me dijo que me dejaba comida que eran unos sándwich me dijo que no intentara hacerme el héroe, que no hiciera pendejadas, que si no íbamos a acabar mal y como dijo con acento de voz al hablar era de extranjera, arrastrando la “ ” como hablan el español los

La persona del sexo masculino me dijo que me quitara la cobija y me puso de frente a la mujer extranjera que me hablaba y vi que esta traía un pasamontañas y unos lentes oscuros, observé que su cuerpo era de mujer, por su cuerpo, la forma, sus era muy y vi que su cabello se le salía del pasamontañas, su cabello era de color teñido, al parecer ..” (fojas 251 del tomo penal)

En tanto que en su ampliación de declaración (fojas 529 a 533 del proceso penal), a preguntas del defensor particular de la quejosa, específicamente la número once, en el sentido de qué tiempo transcurrió desde que fue sacado de los billares hasta que escuchó por primera vez la voz de la mujer que arrastraba la " contestó *"en el transcurso del camino no sé si fue una hora o cuarenta minutos, me quitó mi teléfono celular y después perdí la razón del tiempo"*.

Lo anterior denota una inconsistencia de suma relevancia en la narración de los hechos, pues es lógico que en un principio haya relatado con minuciosidad los detalles de su secuestro, como lo fue inclusive la estatura, edad y acento del supuesto líder, así como las características propias de la camioneta en que fue trasladado, señalando únicamente en este evento a tres personas del sexo , para después corregir y señalar a como una de las tripulantes de la camioneta a quien inclusive le otorga una participación activa, como lo es el quitarle su teléfono celular, hecho que originalmente atribuyó al que señaló como líder; no obstante que en su primera declaración mencionó que fue hasta la casa de seguridad que la escuchó y que después la vio físicamente.

A lo anterior deben aunarse todas las inconsistencias en las declaraciones de , y en torno a la casa de seguridad en donde –dijeron- estuvieron retenidos, pues

este dato también es relevante para restarle credibilidad a los referidos testimonios.

DECLARACIÓN DE	DECLARACIÓN DEL MENOR	DECLARACIÓN DE
Es privado de la libertad el 4 de octubre de dos mil cinco.	Es privado de la libertad el día diecinueve de octubre de dos mil cinco.	Es privada de la libertad el día diecinueve de octubre de dos mil cinco.
En la primera casa de seguridad a los quince días el líder de los secuestradores le menciona que habían secuestrado a una señora y a un niño.		
Es hasta el mes y medio de estar privado de la libertad que conoce a y a . (Es decir a mediados del mes de Noviembre)	Que en la primera casa donde estuvieron privados de la libertad, los sacaron (con su mamá) de la recámara donde estaban retenidos, porque la iban a arreglar y los llevaron con otra persona que también estaba secuestrada de nombre , es decir el 22 de octubre de dos mil cinco.	
En otro momento de su misma declaración, manifiesta que al momento de estar platicando con la señora le dice que llevaba un mes privado de su libertad. (en la primera casa de seguridad)	Que en la nueva habitación del primer lugar donde los tenían privados de su libertad, estuvieron un mes, es decir hasta finales del mes de Noviembre.	En la primera casa los tenían privados libertad estuvieron aproximadamente veinte días.
Que fue diez días aproximadamente antes de su liberación, es decir los últimos días de Noviembre de dos mil cinco donde lo cambiaron conjuntamente con el menor y su madre a una nueva casa de seguridad.	Que después de ese mes, a él y a su mamá los metieron a un coche y los cambiaron de casa, es decir a mediados del mes de Noviembre, donde iba también y estuvieron los primeros tres días con los ojos vendados en una recámara.	Que a ella y a su hijo los metieron en un coche y fue como llegaron a la segunda casa de seguridad, no menciona a nadie más que iba secuestrado.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

Que al cuarto o quinto día de estar en la segunda y última casa de seguridad, es decir a principios de la primera semana de Diciembre de dos mil cinco, lo sacan de la casa en una camioneta y al minuto de estar en marcha se detiene el vehículo y lo ingresan a una casa en donde se baña conjuntamente con el niño	Que en la última casa de seguridad estuvieron veinte días aproximadamente y que al bañarse lo hacía en otra casa a la cual era transportado en un vehículo pero se tardaba aproximadamente cinco minutos.	Que a ella la llevaban a bañar en el mismo lugar que a su hijo y a l pero que era en la misma casa; es decir en ningún momento refiere el transporte en vehículo mencionado tanto por como por para la realización de la citada actividad de aseo personal.
Por último manifiesta que al niño y a la mama se los presentaron hasta la segunda casa en donde fue liberado.		
En todo momento manifiesta que se tapaba con la misma cobija de color roja	Declara que vio a pero con una cobija de color azul.	

Por lo anterior, el dicho de
respecto de la participación de
, en el secuestro de que fue objeto, se constituye
en prueba insuficiente para fincar la plena de responsabilidad de
la quejosa , en la comisión
que se le atribuye del delito de privación ilegal de la libertad
en su modalidad de secuestro, sobre todo si se toma en cuenta
que el informe rendido por los policías federales, lo único que
pudiera demostrar es su detención en unión de
, el día nueve de diciembre de dos mil cinco, a las cuatro
horas con treinta minutos, en el kilómetro de la carretera
a la entrada del poblado de
; pues como quedó precisado en párrafos precedentes,
los hechos que se relacionan con la liberación de las víctimas del
secuestro y su supuesta detención en flagrancia por la comisión

de este delito, se tradujeron en una violación a la garantía del debido proceso legal, por la demora en su puesta a disposición ante el Ministerio Público; por tanto, no generan ningún valor convictivo en torno a este evento, por tratarse de una prueba que violó flagrantemente los derechos fundamentales de la peticionaria del amparo.

Aunado a lo anterior, no puede pasar inadvertido para esta Sala que si bien el parte informativo rendido por los policías federales se constituye en una prueba de cargo por lo que **respecta al delito de posesión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada**; es el caso, que dicho documento carece de fiabilidad, si se toma en consideración que al haberse acreditado una serie de irregularidades en la detención de la quejosa, ahora recurrente, se hizo necesario que en la comparecencia realizada ante el Ministerio Público Investigador el uno de marzo de dos mil seis, los referidos agentes aprehensores reconocieran la existencia de un error en el oficio de puesta a disposición de la detenida, aclarando en ese acto una hora diversa a la en que aconteció la detención, así como también aclararon la hora en la que supuestamente fueron rescatadas las víctimas, hecho este último que además fue desmentido por el propio Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien en una conferencia de prensa realizada el día diez de febrero de dos mil seis, reconoció que las imágenes transmitidas por la televisión no reflejaban el momento real de la detención y rescate de las víctimas (foja 793 del proceso penal).

Se arriba a esa convicción, porque de la serie de contradicciones en la narrativa de los hechos acontecidos el día nueve de diciembre de dos mil cinco, que se advierten tanto en el oficio de puesta a disposición, como en las declaraciones de los policías federales pertenecientes a la entonces Agencia Federal de Investigación, que –dijeron- participaron en la captura de **no puede establecerse con certeza cuáles hechos fueron los que realmente acontecieron a partir de que la quejosa fue detenida por aquéllos; no obstante hubieran pretendido aclararlos, dado que al haber falseado parte de la información proporcionada la autoridad ministerial, provoca desconfianza en cuanto a la veracidad de lo por ellos manifestado y pone de manifiesto** además, que la actuación de dichos agentes violentó el contenido del artículo 21 constitucional que establece el principio de buena fe ministerial, al señalar que: *“la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”, deberes que se entienden violados debido a la serie de irregularidades en que incurrieron al haber alterado los hechos de una supuesta detención en flagrancia, en vez de asegurar el cumplimiento de su deber para con la seguridad pública.*

Es importante destacar que el órgano Colegiado tuvo por acreditada plenamente la responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, tanto con las testimoniales de las

víctimas, como con el parte informativo de los agentes que llevaron a cabo su detención, sin embargo como quedó precisado en párrafos precedentes, **es indudable que las consecuencias de la violación al derecho a la presunción de inocencia se materializaron directamente en las referidas pruebas de cargo, por tanto también por lo que respecta a este delito deberán tomarse en cuenta las consideraciones sostenidas en esta ejecutoria.**

Por último, cabe mencionar que en la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito existen otras pruebas que fueron valoradas. Sin embargo, estas se refieren únicamente a cuestiones relacionadas con el otro individuo detenido el nueve de diciembre de dos mil cinco.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Véase el Cuaderno de amparo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se valoran las siguientes pruebas de cargo referentes a : Informes rendidos por la agente de policía : y su ratificación en relación con el secuestro de la Primera denunciante de (fojas 845, 878 vuelta y declaración ministerial y ampliación de ****, quien pagó el rescate de la Primera denuncia (fojas 845 y 879); las declaraciones ministeriales y judiciales de la Primera denunciante de las de su madre declaraciones y los informes rendidos por los elementos de la AFI: e relativos al secuestro de la Primera denunciante de (fojas 845 vuelta a 846 y 879 a 880 vuelta); declaración de en lo relativo a sus actividades ilícitas, su relación con la persona identificada como "t" y los otros miembros de (fojas 874 a 875 vuelta); dictamen pericial en materia de audio y video con muestra de voz y video de (fojas 850 y 850 vuelta); dictámenes periciales en materia de balística en los que se relata que las armas encontradas son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que funcionan correctamente (fojas 859 y 859 vuelta); declaración ministerial de ****, dueña de relativa al contrato de arrendamiento del predio celebrado con (fojas 850 vuelta y 851); diligencia de cateo de 18 de diciembre de 2005 e inspección ministerial de 26 de diciembre de 2005, ambas del ; (fojas 848 vuelta y 849); informe en materia de criminalística con imágenes de (fojas 849 vuelta y 850); dictamen pericial en materia de video en el que se filmó el cateo a (foja 850); inspección ministerial de la (foja 848 vuelta); diligencias de traslado de personal de actuaciones, inspección ministerial e inventario del automóvil identificado por la Primera denunciante de (fojas 846 y 846 vuelta); parte informativo y ratificación sobre la denuncia del secuestro de Víctima-Testigo 1 (fojas 847 y 847 vuelta); declaración ministerial de ****, empleado del billar donde trabajaba Víctima-Testigo 1, y su ampliación (fojas 802 a 803); declaración ministerial de Esposa de la Víctima-Testigo 1 relativa a la denuncia de su secuestro (fojas 803 vuelta a 805); declaraciones ministeriales del padre de la Víctima-Testigo 1, las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hijo, en donde reconoce la voz de y entrega las grabaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre él y quien secuestró a su hijo (fojas 805 a 806 vuelta y 808 vuelta, 810 y 810 vuelta); el oficio PGR/SIEDO/CT/DGAST.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

Por todo lo anteriormente expuesto, al advertirse que los motivos de inconformidad planteados por la quejosa, ahora recurrente, son esencialmente fundados –los cuales fueron suplidos en su deficiencia–, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluye que el acto reclamado, es violatorio de los artículos 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho–, en lo concerniente al derecho humano de debido proceso, garantizado por el principio de defensa adecuada y de las reglas de valoración de la prueba; y, en consecuencia, a fin de restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a _____, para el efecto de que el magistrado del Tribunal Unitario responsable, declare insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva, en la que siguiendo todos y cada uno de los lineamientos que se precisaron en esta ejecutoria, dicte un nuevo fallo conforme a derecho proceda.

con la transcripción de las comunicaciones telefónicas entre el secuestrador y el padre de la Víctima-Testigo 1 (foja 844 vuelta y 854 vuelta); declaraciones ministeriales de **** en las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hermano e identifica la voz de _____

como la de uno de los secuestradores que llamó a su casa (fojas 806 vuelta a 808 vuelta); declaración y ampliación ministerial de la madre de la Víctima-Testigo 1, en las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hijo y sus comunicaciones con los secuestradores (foja 810 vuelta a 812); acta circunstanciada de la diligencia de cateo de 28 de diciembre de 2005, realizada en el inmueble de _____, donde se encontraron distintos objetos de la Víctima-Testigo 1 (fojas 844 y 844 vuelta); parte informativo, ratificación y ampliación de la diligencia realizada por distintos miembros de la AFI en la que recorrieron un _____ con la Víctima-Testigo 1 para que reconociera la primera casa donde estuvo secuestrado (fojas 847 y 847 vuelta); pericial en materia de representación gráfica sobre el inmueble de _____ e informe de criminalística practicado a dicho inmueble (foja 847 vuelta); pericial en materia de video sobre la diligencia de cateo realizada en el inmueble de _____ (fojas 850 y 850 vuelta); declaración de **** sobre negociaciones del secuestro de la Víctima-Testigo 1 (fojas 848 y 848 vuelta); declaración ministerial de Declarante-padre de víctima-testigo 3, esposo de Víctima-Testigo 2 y padre de Víctima-Testigo 3, y sus dos ampliaciones, en las que narró las condiciones del secuestro de su esposa y su hijo los hechos posteriores que le son propios (fojas 825 vuelta a 832 y 873 vuelta) y, por último, el informe policial / '2006 y su ratificación, relativo a la orden de investigación del secuestro de Víctima-Testigo 2 y Víctima-Testigo 3 y en el que se mencionan varios secuestros más (fojas 880 vuelta a 881 vuelta).



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

751

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PRESIDENTE DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
P R E S E N T E.

PRIMERA SALA

A. D. R. 517/2011

OF. No. 341.

20 ANEXOS:

18 CUADERNOS

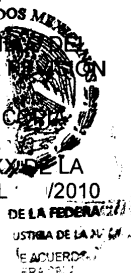
J.A.D. /2010 (USB)

TOCA PENAL 1 /2008

LA CAUSA PENAL /2010
EN 16 TOMOS

1 EXPEDIENTE
RECURSO DE

1 LEGAJO EN
CERTIFICADA
DEL TOMO XXX DE LA
CAUSA PENAL /2010



En el amparo directo en revisión, cuyo número se anota al margen,
promovido por

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
dictó sentencia con fecha veintitrés de enero del presente año, por lo que se le
remiten los autos correspondientes al juicio de amparo directo número /2010 en
1018 fojas, engrapado al mismo un sobre conteniendo un USB, expedientillo del
recurso de revisión en 37 fojas, el toca penal /2008 en 797 fojas y la causa penal
/2010 en: Tomo I en 766 fojas; Tomo II en 222 fojas; Tomo III en 492 fojas; Tomo
IV en 283 fojas; Tomo V en 492 fojas; Tomo VI en 22 fojas, en las cuales se
encuentran 16 audio casetes, dos video casetes VHS y una grabadora: Tomo VII en
930 fojas, en la foja 793 se encuentra un disco compacto; Tomo VIII en 806 fojas, en
la foja 299 se encuentran dos video casetes; Tomo IX en 716 fojas; en la foja 669 se
encuentra una gorra y en la 670 una gorra pasamontañas; Tomo X en 721 fojas;
Tomo XI en 842 fojas; Tomo XII en 732 fojas, en la foja 182 se encuentra un disco
compacto y en la 222 dos discos compactos; Tomo XIII en 872 fojas; Tomo XIII-A en
949 fojas y Tomo XII-B en 577 fojas; un anexo original de la causa penal /2010
en 330 fojas según sus últimos folios y un legajo en copia certificada del Tomo XXX
de la causa penal /2010 en 226 fojas según su certificación. Además se le
informa que una vez concluido el trámite del engrose del citado asunto, se le remitirá
el testimonio correspondiente.

He de agradecer, se sirva ordenar se acuse el recibo
correspondiente.

Protesto a usted mi atenta consideración.

México, D. F., a 8 de febrero de 2013.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA.

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

Se recibe con los anexos descritos

**SIN
TEXT**





PRIMERA SALA

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.
QUEJOSA:PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

México, Distrito Federal, a diez de enero de dos mil trece.

Con fundamento en el artículo 185, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se señala para la audiencia respectiva en este asunto el veintitrés de enero de dos mil trece. Doy fe.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil trece.

Se hace constar, con fundamento en el artículo 186 de la Ley de Amparo, que en sesión de esta fecha, celebrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio cuenta con este asunto y por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formulará voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente), en contra de los emitidos por los Ministros José Ramón Cossío Díaz quien se reserva el derecho de formular voto particular y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se resolvió:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.**SEGUNDO.-** La justicia de la Unión ampara y protege a en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta sentencia.**TERCERO.-** A través del medio de comunicación más eficaz, comuníquese a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la libertad absoluta e inmediata de.**CUARTO.-** En cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, comuníquese al Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México el sentido de este fallo.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

SIN TEXTO





PRIMERA SALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.
QUEJOSA:**

PROPOSICIÓN: SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A [REDACTED], EN CONTRA DE LA AUTORIDAD Y EL ACTO PRECISADOS EN LOS ANTECEDENTES DE ESTA SENTENCIA. A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS EFICAZ, COMUNÍQUESELE A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA EL SENTIDO DE ESTE FALLO Y ORDÉNESE LA LIBERTAD ABSOLUTA E INMEDIATA DE [REDACTED] EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN DE VIENA DE RELACIONES CONSULARES, COMUNÍQUESELE AL CONSULADO DE LA REPÚBLICA FRANCESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL SENTIDO DE ESTE FALLO.


MINISTROS:

		NO
✓	ARTURO ZALDÍVAR LEO DE LARREA.	
✓	JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.	✓
✓	ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.	
✓	OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.	
	JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.	✓

Acuerdo del día veintitrés de enero de dos mil trece.

Así por mayoría de tres votos, se aprobó la proposición anterior.

LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA


LIC. BEATRIZ J. JAMES RAMOS

SIN TEXTO

